**La evolución del concepto de guerra en Colombia y su reflejo en la formación militar
(1998-2014): El caso de la Escuela Superior de Guerra visto a través de la Revista
Fuerzas Armadas.**

Juan Pablo Villamizar Hernández

Trabajo de grado para optar por el título de sociólogo

Director:

Carlos Andrés Charry

Universidad del Rosario

Escuela de Ciencias Humanas

Bogotá

2018

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Capítulo I. La guerra como fenómeno social.....	20
Capítulo II. El conflicto colombiano a través del tiempo y el papel de las fuerzas militares.....	26
2.1 De la contienda bipartidista a la subversión (1958-1982).....	27
2.2 Aumento de jugadores, el fortalecimiento guerrillero, los paramilitares y el auge narcotraficante (1982-1996).....	31
2.3 Renovación y reestructuración militar para una confrontación frontal y el recrudescimiento del conflicto (1996-2005).....	36
2.4 Superioridad estratégica, desmovilización paramilitar y reducción de acción guerrillera (2005-2014).....	42
Capítulo III. La Escuela Superior de Guerra una visión institucional.....	49
3.1 Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto, unión, proyección y liderazgo.....	50
3.2 Andrés Pastrana (1998-2002), cambio para construir la paz.....	53
3.3 Álvaro Uribe (2002-2006), hacia un estado comunitario.....	58
3.4 Álvaro Uribe (2006-2010), estado comunitario: desarrollo para todos.....	63
3.5 Juan Manuel Santos (2010-2014), prosperidad para todos.....	66
Capítulo IV. La Escuela Superior de Guerra una visión de quienes la vivieron.....	74
4.1 Prepararse para la guerra y para la paz.....	74
4.2 Una nueva realidad, estudiar en la Escuela Superior de Guerra.....	76
Bibliografía.....	85
Anexos.....	91
Anexo 1. Editoriales revista Fuerzas Armadas.	
Anexo 2. Instrumento de recolección de información.	
Anexo 3. Entrevistas realizadas.	

Introducción

A lo largo de la historia las Fuerzas Militares (FF.MM) de Colombia han estado involucradas en conflictos bélicos de carácter regular e irregular. En cuanto a los primeros, las Fuerzas se han enfrentado a los ejércitos de Ecuador y Perú, además de haber apoyado a otros Estados en conflagraciones internacionales¹. Pero la constante durante más de medio siglo han sido los enfrentamientos con grupos guerrilleros, un conflicto interno que ha sido catalogado de diversas formas como una guerra irregular, una guerra de guerrillas, guerra contra el narcotráfico, conflicto armado, entre otras.

Así pues, desde el Estado, la población civil e incluso la academia, se han dado diversas posiciones y definiciones acerca de la confrontación armada entre diversos grupos y/o actores (León, 2005; Mejía, 2008). Bajo esta luz, este trabajo busca analizar desde una perspectiva de la sociología de la guerra sobre la construcción y definición que se da, desde el Estado, del conflicto y de los grupos armados que se les oponen (Weber, Tilly, Clausewitz, Scott, Bonaneva, Nievas)². Respecto a esto, se tomará el caso de la Escuela Superior de Guerra (en adelante ESDEGUE) que es una institución de educación superior militar (posgrados), que capacita a los oficiales superiores de las Fuerzas Militares de Colombia, con el propósito de conducir la guerra, consolidar la paz y contribuir al desarrollo del país³. De igual manera brinda capacitación al personal civil que desee vincularse dentro del proceso educativo allí ofrecido (Maestría en Seguridad y Defensa Nacional o Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados), con lo cual las Fuerzas Armadas (FF.AA) han buscado forjar, mantener y fortalecer la relación entre personal militar y civiles, promoviendo la preocupación por la seguridad de la nación.

¹ A lo cual el artículo 217 de la Constitución Política de 1991 expresa: "Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional".

² Esta rama de la sociología se enmarca en la forma en que se piensa la guerra y la forma en que se hace la guerra, lo cual ha dado cabida a múltiples consideraciones dentro de su campo de estudio, siendo algunas: el papel de las fuerzas armadas en la sociedad, la formación de los Estados, la violencia en la formación de la modernidad, las relaciones cívico-militares, la globalización de los conflictos, cooperación internacional, el derecho internacional de los conflictos armados. (Scott, 2001; Scruton, 1987; Nievas, 2009).

³ Misión que brinda la ESDEGUE en su página oficial disponible [on line] en: <http://www.esdegue.mil.co/node/922>

Las acciones de formación de la ESDEGUE, se enmarcan en elementos exógenos, incluyendo regulaciones en el derecho internacional (regulación de los conflictos armados provenientes de la ONU, del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Conflictos Armados, entre otros) y elementos endógenos (la existencia de un conflicto armado, narcotráfico, bandas criminales, entre otros) en los que Colombia y las FF.MM. se ven inmersos. Es por esto que ha tenido lugar un constante proceso por adaptar las condiciones de las FF.MM para que puedan responder de forma acertada y actualizada a las coyunturas del país, y a las necesidades de responder al conflicto armado. Uno de los procesos más recientes de transformación de las FF.AA, es el comprendido entre 1998 a 2014, denominado como la transformación militar (cambios tecnológicos, institucionales y doctrinales) de las Fuerzas Armadas (Fundación Seguridad y Democracia, 2003). Dentro de esta transformación se enmarca la educación militar, que por sus características de formación profesional única y especializada, se ha materializado en un sistema con ciertos valores, ethos, ideas y representaciones con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes en quienes integran las Fuerzas Armadas que permita y avale el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada constitucionalmente⁴, con lo cual se han generado espacios para el fortalecimiento, no solo de esta educación superior militar especializada, sino también de las relaciones entre la población civil y militar como el caso de los cursos de posgrado de la ESDEGUE.

Un aspecto que requiere mayor investigación en Colombia, es el de la evolución que ha tenido el concepto de guerra entre las FF.AA, lo cual puede ser estudiado desde un análisis de la ESDEGUE, incluyendo el enfoque, conceptos, y contenidos inmersos en sus programas educativos. A partir de este interés investigativo, es posible plantear la siguiente pregunta:

⁴ ...Y Garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, así como el respeto del orden constitucional y el fortalecimiento de la democracia (Gantiva, 2009).

¿Cómo ha evolucionado el concepto de guerra en Colombia entre 1998 y 2014, y cómo se reflejan esos conceptos cambiantes en la formación de los militares?

Así pues, desde el contexto nacional, una lectura panorámica de lo que se ha estado produciendo en las ciencias sociales colombianas desde hace al menos una década, nos permite entender que el grado de innovación en cuanto a teorías, métodos y técnicas, ha estado determinado en función de adaptarse a la naturaleza de un conflicto armado de larga duración pero de baja intensidad (Cubides, 2008). Por lo cual se ha contado con aportes significativos para el entendimiento del conflicto armado desde sus diversos actores y relaciones, ha existido un especial interés en las víctimas (Naranjo, 2001; Oslender, 2006), y en los diversos grupos armados incluyendo a guerrillas (Pizarro, 1991; Ferro & Uribe, 2002; Llano, 2009) y paramilitares (Velásquez, 2007; Romero, 2003; Cubides, 2004). Dentro de esa literatura, hace falta una mayor mirada a otro de los actores del conflicto, como lo son las FF.MM. solo algunos trabajos se han orientado en este actor (Gantiva, 2009; Grajales & Rodríguez, 2011; León, 2005; Mejía, 2008), pero esos trabajos previos se han enfocado en las distintas instituciones de formación educativa del ejército, la evolución de las estrategias de guerra en Colombia, el servicio militar como vivencia y/o los imaginarios que existen acerca de las FF.AA.

Dentro de los trabajos mencionados, se detecta la necesidad de investigar cuál ha sido el papel de la ESDEGUE dentro de la evolución del conflicto armado en las últimas décadas, sobre todo en su articulación a la definición de la guerra durante varios gobiernos. Este tema es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de las estrategias de las FF.AA, en respuesta a las dinámicas internas del conflicto (repliegue de las guerrillas, narcotráfico, bandas criminales, contrabando), y a tendencias en la coyuntura internacional (lucha anti-terrorista, guerra contra las drogas, políticas y dinámicas migratorias). En las últimas décadas ha habido discusión teórica sobre el concepto de guerra (Bonavena & Nievas, 2006 Scott,

2001), incluyendo tendencias como el énfasis en economía política de la guerra (Scruton, 1987), y discusiones más políticas o ideológicas (Sánchez, 2008; Ortiz, 2009).

De igual manera se observa un cambio en las consideraciones relacionadas a la guerra durante el periodo seleccionado, esto registrado en la Revista Fuerzas Armadas, una publicación oficial de la ESDEGUE en la cual se plasman, desde el ámbito académico, temáticas relacionadas con la Seguridad y Defensa nacional, regional y global. Durante el periodo presidencial de 1998-2002, se afirma que Colombia posee relaciones limítrofes tranquilas, con países que se preocupan por entender el conflicto que nos aqueja, por lo cual la estrategia militar debe atacar a los agentes generadores de violencia que constituyen una amenaza permanente contra nuestra sociedad y recursos (Bonnett, 1998, pág. 3). Para el siguiente periodo presidencial, el de Álvaro Uribe Vélez, se aprecia que el incremento de la capacidad de contención de las guerrillas, por parte del Estado representado en las FF.AA, logró convencer que una victoria militar era imposible (para las guerrillas), e igualmente que el respeto a los Derechos Humanos y a la población son la clave para que los colombianos vivan en un ambiente seguro (Bell, 2002; pág. 9). Asimismo, para 2010 con el cambio de gobierno se expresa que las FF.MM brindaron seguridad para proteger los derechos de la población y permitirle el disfrute de sus libertades. Seguridad para que actúe la justicia y crezca la inversión, para que otras instituciones del Estado puedan trabajar libres de cualquier tipo de presión violenta, en suma, seguridad para la paz (Cely, 2014; pág. 4).

En ese contexto, la presente investigación busca aportar al corpus de estudios de la sociología de la guerra en general y en Colombia, desde un terreno poco explorado hasta el momento. Es necesario realizar más trabajos sobre la posición que asume el Estado y sus instituciones, particularmente las Fuerzas Armadas frente a la guerra. Aquí se busca indagar por la definición y los usos del concepto de “guerra” en el campo de las Fuerzas Militares,

específicamente desde la ESDEGUE, analizando la composición epistemológica de la ESDEGUE, discutiendo la forma en que responde a los procesos nacionales e internacionales.

Para dar respuesta a la interrogante mencionada se desarrollan cuatro capítulos que tratan sobre I) el devenir conceptual de la categoría guerra, II) el proceso histórico del conflicto armado, III) una visión macroestructural de la ESDEGUE y, por último IV) una visión microestructural de la ESDEGUE. En el primer capítulo, *La guerra como fenómeno social*, se aborda un análisis de la guerra multivariado que permite entenderla como un fenómeno social, con diversas dimensiones (significado, motivaciones, ejecución, táctica, entre otras), siendo una actividad social y política, para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001). De igual forma, el Ejército se entiende no solo como parte de las Fuerzas Militares cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional del Estado (en este caso, el colombiano), bajo la consigna de legitimidad (Constitución política de Colombia, 1991; art 217), sino también como una forma de burocracia que representa al Estado y que posee la potestad de hacer y desarrollar la guerra entendida, desde la apuesta teórica de Clausewitz, como una actividad social que incluye la movilización y organización de individuos, que regula ciertos tipos de relaciones sociales y posee su lógica particular, enfocada como un acto político para que prevalezca una forma de proceder (ideología) sobre otra (Roxborough, 1994).

En el segundo capítulo, *El conflicto colombiano a través del tiempo y el papel de las Fuerzas Militares*, se realiza una síntesis de la evolución del conflicto armado en Colombia, de sus diversos actores y un particular énfasis en el papel de las Fuerzas Militares a lo largo de este. De igual forma destaca al conflicto armado como un suceso con múltiples aristas, actores, repercusiones, entre otras particularidades a analizar para, en la medida de lo posible, no repetirlo. Lo expuesto a lo largo de este capítulo no pretende ser un recuento exhaustivo

sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Si bien existen autores que se enfocan en los detalles al interior del conflicto, como aportes significativos para el entendimiento del mismo, desde sus diversos actores y relaciones hace falta mayor profundidad en lo concerniente a las Fuerzas Militares como actores en medio de la confrontación.

El tercer capítulo, *La Escuela Superior de Guerra una visión institucional*, se expone el caso de estudio, Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE), bajo el lente teórico propuesto en capítulos anteriores, para establecer y analizar la evolución del concepto de guerra. Para tal fin, se examinan y comparan las editoriales de la revista Fuerzas Armadas publicada por la ESDEGUE desde 1960 hasta la fecha y con más de 200 ediciones. De este modo se seleccionan 17 editoriales, una por año transcurrido en el periodo dado (1998 a 2014) y por su autor (presidente de Colombia, Ministro de defensa y/o General en jefe de las FF.MM), para dar cuenta de una explicación macro desde la posición del Estado y la ESDEGUE como instituciones que regulan e influyen a los individuos.

El Capítulo cuarto, *La Escuela Superior de Guerra una visión de quienes la vivieron*, continúa indagando en el caso escogido (la ESDEGUE), bajo el lente teórico propuesto en capítulos anteriores, para establecer y analizar la evolución del concepto de guerra desde aquellas personas que formaron o forman parte de la misma institución. En este caso se trata de dos estudiantes civiles graduados, un profesor de la institución que es civil, un Coronel en retiro que es profesor y fue a la vez alumno de la institución, y un Coronel retirado que fue alumno y profesor de la institución. Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas como el puente para explorar e identificar la forma en que los estudiantes de la ESDEGUE construyen la noción de guerra, de sí mismos como miembros de las FF.MM o como civiles con filiación a estas y, al mismo tiempo, explorar e identificar la forma en que los estudiantes de la ESDEGUE construyen a los “otros” actores del conflicto armado colombiano. Todas las entrevistas se realizaron bajo consentimiento informado de cada uno de los participantes,

cuyas identidades fueron cambiadas para resguardar su integridad y por solicitud de ellos mismos.

Con esto se tendrá como punto de partida las categorías de análisis: motivaciones (para ingresar a las FF.MM y para ingresar a la ESDEGUE), actores (del conflicto armado) e influencia institucional (sentido de pertenencia a las FF.MM y/o a la ESDEGUE). De igual forma, las categoría mencionadas, comprenden unas subcategorías transversales siendo estas valores (que adquiere o adscribe el individuo), las representaciones (de sí mismo y de los otros) y las prácticas (propias, institucionales y de los otros).

Estado del arte

Para la presente investigación es pertinente mencionar los aspectos más destacados y tratados respecto a la institución militar, el desarrollo de la guerra y el discurso manejado por quienes pertenecen a dicha institución, aquellos que se refieren a los asuntos que conciernen a la definición de las FF.MM., o al lenguaje que se utiliza para referirse al conflicto interno del país. En el campo de la sociología de la guerra se ha abordado el tema de la guerra haciendo énfasis en lo propuesto por Carl Jung y el inconsciente colectivo. Así pues, se desarrollan las categorías de arquetipo (estando no ordinario de la conciencia, relativo a los patrones de conducta) y de paradigma (suma de arquetipos que da contenido a un comportamiento determinado y dominante en el colectivo), como elementos propios del inconsciente colectivo (elementos de dotación personal, arquetipo y paradigma, modulados y transformados en la sociedad con el paso del tiempo) que permiten dar cuenta de la influencia de las instituciones militares y los imaginarios que se han originado alrededor de estas en la sociedad, particularmente en Colombia (Mejía, 2008).

Otros estudios, provenientes del análisis realizado por diversos autores (Marx, Weber, Huntington, Janowitz, entre otros), hacen énfasis en la formación de los Ejércitos nacionales como institución que capacita a los profesionales de las armas. Es decir que se

centra en la aparición de las distintas Fuerzas Armadas en un contexto internacional y nacional y su esfuerzo por profesionalizar la carrera militar. A partir de este se da cuenta de la estrecha relación entre la educación que recibe el soldado para su formación militar y cómo esto es un factor estratégico para la seguridad y defensa nacional desde el Estado (Gantiva, 2009; 30).

De igual forma, se cuenta con investigaciones cuyo énfasis se da en la formación militar y su esfuerzo por profesionalizar la carrera militar, donde su preparación le permita asumir las nuevas funciones externas que la realidad nacional y los compromisos internacionales le imponen. Con esto se afirma que los oficiales, según Diamint (2007), no sólo deben saber hacer la guerra, además tienen que saber instalar la paz: restaurar o instaurar el estado de derecho, hacer funcionar instituciones, acompañar la reconstrucción económica. Profundizar el entrenamiento de los uniformados para las tareas de Cooperación Cívico Militar (CIMIC) no implica desestimar la formación tradicional de los hombres de armas, ni descartar los principios de control civil democrático de los militares. No obstante, apunta a una formación más compleja y a un debate incesante entre especialistas civiles y militares, para obtener una relación de confianza y mutuo aprendizaje.

Asimismo, existen propuestas del pensamiento neo-Clausewitziano con cinco puntos relevantes, los cuales buscan aportar en la comprensión de la guerra como un fenómeno social y con unos actores específicos, destacando al Ejército por su preparación en la profesión de las armas. Los puntos son: primero, una distinción entre las dimensiones de la guerra y los actores e instituciones envueltos en ella; segundo, una nueva dimensión de la guerra que contemple la economía dentro de la guerra (lo mundano); tercero, los tres actores propuestos por Clausewitz (comandante, gobierno, ciudadanos) deben desagregarse; cuarto, la definición de la guerra cercana a la política; finalmente, una definición de política más amplia que la dada por Clausewitz (Scruton, 1987; Roxborough, 1994; Cuellar, 2009). Con lo cual se

concluye que los códigos que definen lo sagrado y lo profano en la vida social (con un limitado grupo de estructuras narrativas dentro del discurso de la sociedad civil) forman el andamiaje cultural por medio del cual una política militar puede ser legítima y pensable (Cuellar, 2009).

Otro estudio relacionado en indagar respecto a la guerra es el planteado por Gonzalo Sánchez, quien busca esclarecer la relación entre la política y la guerra en el devenir histórico de Colombia. Así pues, se hace hincapié en el cambio de nombrar el conflicto armado como un periodo de violencia a ser catalogado como una guerra (de guerrillas, contra el narcotráfico, de las bandas criminales, entre otros), suponiendo un proceso de formación de la Nación de rupturas sucesivas, en los que las variables política y guerra, se articulan de diversas formas teniendo resultados inconclusos (no hay vencedores ni vencidos claramente identificados) para la administración y repartición del poder (político-económico) en Colombia.

Si bien la presente investigación puede tener en común con este cuerpo de estudios la preocupación por la concepción de la guerra y su devenir académico, es importante destacar la especificidad a tratar, en el contexto colombiano, de una Institución Militar (ESDEGUE) que forma a los oficiales superiores, que adicionalmente brinda la posibilidad de que la población civil participe y se capacite a la par con los oficiales. Puesto que dicha formación hace parte de un discurso institucional con repercusiones en los individuos (estudiantes) pertenecientes a la institución y cómo estos, a su vez, se apropian, transforman o rechazan esta visión, a fin de generar una concepción “propia”, relacionada a la idea misma del individuo, de los otros actores involucrados en el conflicto armado colombiano, así como una noción propia del conflicto armado del país.

Referente al discurso como concepto o categoría de análisis, este se enmarca en la pregunta sobre la relación entre el pensamiento, las palabras y la realidad. Así este concepto

se ha abordado desde su historicidad, encontrando a uno de sus exponentes en Michel Foucault, quien a través de estudios sobre la historia de la sexualidad y/o de la locura (entre otros), encuentra que las relaciones de poder median las relaciones sociales, valiéndose del discurso como recurso para el ejercicio del control y la prohibición (Foucault, 1976; Foucault, 1964).

Una aproximación más cercana al tema a tratar, es la realizada por Orlando Ortiz (2009), quien retoma la propuesta de Michel Foucault de la construcción social del discurso, enfocada en el conjunto de elementos que se utilizan como referentes de identidad y fuentes de integración y cohesión alrededor del cual se articulan individuos y sociedades. Con lo cual se da cuenta del proceso histórico mediante el cual se ha definido el “militarismo” y las acciones que esto ha llevado a tomar a las FF.MM. colombianas, entendido esto como la prevalencia de un pensamiento y unas prácticas en las que el recurso a la acción militar se superpone como forma de manifestación, de tratamiento y solución de sus conflictos (Ortiz, 2009), presente en los individuos que forman parte del Ejército Nacional de Colombia.

Asimismo, la Fundación Seguridad y Democracia realizan un análisis sobre los principales aspectos de cambio al interior de las Fuerzas Armadas colombianas, tras tres factores determinantes (crisis militar entre 1996 y 1998, reacción de la administración Andrés Pastrana frente a la crisis y el proceso de transformación militar). Este análisis aborda el discurso implementado, tanto internacional como nacionalmente, en la formación de los individuos pertenecientes a las FF.MM para afrontar la realidad del conflicto armado colombiano en el que se ven inmersos.

Así mismo, es importante retomar lo expuesto por Fernando Estrada, quien se centra en la creación de actitudes y comportamientos colectivos a partir del lenguaje y las representaciones que se desprenden de su uso para interpretar el conflicto armado. De este modo, Estrada asegura que las metáforas empleadas para dar cuenta del acontecer y desarrollo

del conflicto, definen los espacios de dominio y poder, mientras que al mismo tiempo puntualiza a las partes involucradas (colectivos como las FARC, paramilitares, Policía, Ejército, Estado y los individualiza como actores concretos “guerrillero”, “paraco”, “agente”, “soldado”, “funcionario”). Así pues, concluye que el conflicto armado ha permeado el uso del lenguaje para dar contenido y significado a la conciencia colectiva del ciudadano corriente, quien a su vez ha formado criterios para delimitar y definir el conflicto y sus participantes.

Otro aporte significativo, proviene del análisis realizado por Maria Teresa Uribe de Hincapié y Liliana López (2006) al lenguaje empleado en medio de tres guerras civiles en el siglo XIX en Colombia como herramienta discursiva. Es de este modo se destaca el poder que se le adscribe al lenguaje, pues este puede agravar o contener el ánimo guerrerista y justificar las causas de la guerra. Las autoras concluyen que la guerra tiene distintos frentes de acción, siendo uno de estos la forma como se nombran, evidencian u ocultan sucesos (realidades) del conflicto, lo que permite representar el conflicto y sus actores de una manera determinada, privilegiando ciertos sectores e invisibilizando a otros.

En la misma línea investigativa, Carolina Rodríguez (2010) se vale de la categoría de nominalismo de Estado para explicar el papel semántico del soberano en la definición de los términos jurídicos y políticos. Así pues, se toma como punto de partida el gobierno colombiano y su posición en torno al concepto de conflicto armado, con la pretensión de esclarecer si este constituye un apelativo válido para designar la situación de crisis interna. Con lo cual se establece que por medio de atenuar, polarizar y lexicalizar el lenguaje público para referirse al conflicto como una amenaza terrorista, se le configura como un enfrentamiento entre amigos (Estado) y enemigos (grupos insurgentes) que hay que eliminar. Por lo cual Rodríguez concluye que es necesario reemplazar la retórica guerrerista del Estado por una narrativa más conciliadora, para construir nuevos relatos de país con mayor coherencia hacia las expectativas de reconciliación.

Tras lo anterior, se debe tener en cuenta que se han resaltado aspectos claves que abordan el tema de las FF.MM, su discurso y su influencia en los individuos. Sin embargo, se hace evidente una brecha investigativa, pues en este conjunto de estudios no ha habido cabida para un análisis que se preocupe por la definición de guerra que maneja y negocia una institución como la ESDEGUE, que forma a los profesionales de las armas a la par con personal civil, las posibles variaciones dadas a su significado en el desarrollo de un conflicto armado constante en el tiempo y el impacto que esto tiene sobre la esclarecimiento de quiénes están involucrados en el conflicto.

Ahora pues, la presente investigación espera aportar al campo de la discusión sobre la guerra, el discurso y el ejército, en un caso concreto en el cual se construye y transmite la noción de “guerra”, bajo una institución del Ejército colombiano (la ESDEGUE). Por ello se realizará un análisis sociológico del discurso, en el cual se estudie la forma en que la noción de guerra ha evolucionado (1998-2014) y las repercusiones que esta construcción representa en la formación militar (los estudiantes que se instruyen en la ESDEGUE).

Marco teórico

La presente investigación busca resolver la pregunta sobre cómo ha evolucionado el concepto de guerra en Colombia entre 1998 y 2014, y cómo se reflejan esos conceptos cambiantes en la formación de los militares, por ello se abordará teóricamente el desarrollo de la misma bajo el lente compuesto por la sociología de la guerra temática que cuenta tanto con una amplia variedad de autores, como asociaciones internacionales investigando estos tópicos, entre estas la American Sociological Association que desde 1978 incluye estudios específicos sobre la guerra y el conflicto o como la International Sociological Association en Fuerzas Armadas y conflictos.

Para situar al lector en un marco más amplio acerca de cómo se han desarrollado la sociología de la guerra es preciso mencionar que al hablar de guerra, por lo general, se remontan los planteamientos de Sun Tzu, quien explica que esta es el mayor conflicto que un Estado tenga que enfrentar, o que los seres humanos enfrentan para prevalecer en este mundo, en donde puede ocurrir la extinción o la supervivencia (Grajales & Rodríguez, 2001), haciendo énfasis en la reflexión filosófica acerca de iniciar o no una guerra y cómo desarrollarla en caso de encontrarse al interior de esta. Asimismo, se encuentra otra posición que surge del proceso de consolidación del Estado entre los siglos XV al XIX, encontrando a su mayor exponente en Karl von Clausewitz, militar prusiano, historiador y teórico de la guerra. Su aporte se centra en su obra más destacada “*De la guerra*” brindando un análisis de la guerra (su planteamiento, motivaciones, ejecución, táctica entre otros temas), referida como una actividad social y un acto político (instrumento político), para imponerse sobre un determinado Estado o ideología.

En el campo de las ciencias humanas, se encuentran aportes valiosos para abordar la guerra y el Ejército de manera simultánea. Dentro de estos es pertinente mencionar los provenientes de Max Weber (1964), quien muestra al Estado como el poseedor del monopolio de la fuerza (y por lo tanto de la posibilidad de la coacción), lo que le permite desarrollar entidades como la Policía y/o el Ejército para controlar y ejercer dicho monopolio. Asimismo se encuentra a Charles Tilly (1958), quien enmarca su estudio en la creación del Estado moderno, suponiendo a este como una organización con poder coercitivo que se vale de medios militares (Ejército) para mantener su legitimidad. También destaca la guerra, siendo esta un proceso de eliminación de rivales (dentro y fuera de un territorio) por adueñarse de cierto capital, cuyo producto secundario es el Estado mismo.

Otro aporte significativo proviene del trabajo de Anthony Giddens (2007), dejando claro el interés investigativo que el tema tratado ha suscitado para sociología. Dicho autor se

centra en que los estados nacionales son posibles en la medida que esté en medio de otros estados nacionales, posea complejas formas de instituciones de gobierno con el monopolio administrativo sobre un territorio y con respaldo de sus decisiones en el derecho y el control directo de los medios de violencia interna (Policía) y externa (Ejército). Lo cual le permite pensar la guerra como la defensa de la libertad del contrato de trabajo capitalista, pues la asociación entre el estado nacional y el capitalismo depende de la protección y dominación, por medio del monopolio de la violencia, de los medios de producción.

Si bien lo anterior se refiere a algunas de las formas en que la guerra ha sido tratada desde la sociología de la guerra, la presente investigación retoma la propuesta de Alan Scott (2001). Para este autor el papel de lo militar, la guerra y la violencia tienen un papel central en la formación de la modernidad, dando cabida a un análisis de la guerra multivariado (por definirlo de alguna manera) que permita comprender a esta como un fenómeno social, brindando diversas dimensiones (como un planteamiento, unas motivaciones, una ejecución, una táctica, entre otras), referida como una actividad social y un acto político (instrumento político), para imponerse sobre un determinado Estado o ideología.

Es por lo anterior que la presente investigación busca dar cuenta del conocimiento (construido y que se construye) acerca de la noción de guerra, teniendo en cuenta las particularidades contextuales que dan contenido al mismo. Es decir, aquellos significados comunes para referirse a la guerra en Colombia, los cuales dan contenido a la realidad cotidiana y que son interpretados e institucionalizados. De este modo, se abre la puerta a la negociación que realizan los actores (estudiantes), respecto a aquello que proviene de la institución (ESDEGUE) y a aquello que ellos mismos construyen como su visión de la guerra, a sus razones, sus enemigos e incluso a sí mismos.

Finalmente, los códigos que definen lo sagrado y lo profano en la vida social, con un limitado grupo de estructuras narrativas dentro del discurso de la sociedad civil, forman el

andamiaje cultural por medio del cual una política militar puede ser legítima y pensable (Cuellar, 2009). Con los elementos expuestos líneas atrás, se da cabida a un análisis de la guerra multivariado que permite entenderla como un fenómeno social, con diversas dimensiones (significado, motivaciones, ejecución, táctica, entre otras), siendo una actividad social y política, para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001). De igual forma, el Ejército será entendido, como parte de las Fuerzas Militares cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional del Estado (colombiano), bajo la consigna de legitimidad (Constitución política de Colombia, 1991; art 217), el cual tiene la potestad de hacer y desarrollar la guerra entendida, desde la apuesta teórica de Clausewitz, como una actividad social que incluye la movilización y organización de individuos, que regula ciertos tipos de relaciones sociales y posee su lógica particular, enfocada como un acto político para que prevalezca una forma de proceder (ideología) sobre otra (Roxborough, 1994).

Metodología

El carácter metodológico del presente estudio, se desarrolle en dos aspectos. El primero, un análisis de las editoriales de la revista “Fuerzas Armadas”, el segundo, una serie de entrevistas semi-estructuradas a los estudiantes e instructores de la ESDEGUE.

Respecto a los tipos de datos a utilizar se tienen las ediciones seleccionadas del año 1998-2002-2006-2010-2014 de la *Revista Fuerzas Armadas*. Una publicación impresa y virtual de carácter trimestral de la ESDEGUE desde el año 1960, enfocada a difundir desde el ámbito académico, el pensamiento militar relacionado con la Seguridad y Defensa nacional, regional y global para conocimiento y dominio público. Cabe aclarar que será solo una edición por año, aquella que articule el cambio presidencial con el papel de las FF.MM respecto a este y a la noción y ejecución de la guerra, cuya autoría sea de un alto rango militar

dentro de las FF.AA y/o un representante del gobierno (presidente, vicepresidente, ministro de defensa). Con estas editoriales se busca dar cuenta del contenido del concepto de “guerra” en el campo de las Fuerzas Militares, en específico en la ESDEGUE, identificando su enfoque, origen y cambios con el paso del tiempo en el periodo seleccionado.

Asimismo, se cuenta con el análisis de las entrevistas semi-estructuradas a realizar, rastreando similitudes y diferencias respecto a la institución, los actores del conflicto armado y concepto de guerra que poseen los profesores de la ESDEGUE. Estas se realizarán a los encargados de dar las clases en las maestrías de la ESDEGUE (Maestría en Seguridad y Defensa Nacional), siendo así un total de tres entrevistas. Lo anterior radica en el papel que desarrollan estos instructores, en cada una de sus cátedras, al contar con experiencia (tiempo impartiendo una cátedra), el desarrollo de sus contenidos (planeación y cumplimiento del programa de la cátedra) y al ser parte de las FF.MM y de la ESDEGUE.

De igual forma, las entrevistas semi-estructuradas se realizarán a estudiantes pertenecientes a la ESDEGUE. Estos estudiantes serán aquellos que han finalizado su maestría en la institución, permitiendo así un posible balance respecto a sus nociones individuales e institucionales, antes de pertenecer a la ESDEGUE y después de pasar por la ESDEGUE y la influencia que esto ha tenido en la construcción de la noción de guerra y en la de los demás actores del conflicto armado en Colombia.

Finalmente y de forma general, en cuanto a los componentes de la explicación/interpretación, se destaca la triangulación, siendo esta la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno (Denzin, 1990; pág 511). Lo que permite la creación de categorías analíticas, la identificación de patrones repetitivos y las nociones que pueden ser una tendencia generalizada a la hora de hablar o referirse a la guerra y, de igual forma, todas aquellas nociones que se incluyen al referirse a sí mismos (como institución y/o individuos) y a los actores del conflicto armado. Por último, se

tendrá como unidad de análisis a los estudiantes e instructores de la ESDEGUE, pertenecientes a la Maestría de Seguridad y Defensa Nacional.

De este modo es pertinente mencionar que la presente investigación se vale del análisis sociológico del discurso según lo plantea Ruiz (2009) ya que se tiene en cuenta que el mundo social es, en buena medida, un espacio de sentidos compartidos, destacando la importancia que tienen las prácticas discursivas para el conocimiento y la comprensión de la realidad social. El análisis del discurso como método de investigación social está basado, por lo tanto, en dos supuestos fundamentales: 1) el conocimiento de la intersubjetividad social nos proporciona un conocimiento indirecto del orden social; 2) el análisis de los discursos nos permite conocer la intersubjetividad social, porque los discursos la contienen y porque es mediante las prácticas discursivas como es producida.

La guerra como fenómeno social

La presente investigación busca resolver la pregunta sobre cómo ha evolucionado el concepto de guerra en Colombia entre 1998 y 2014 y cómo se reflejan esos conceptos cambiantes en la formación de los militares. Por ello se abordará teóricamente el desarrollo de la misma bajo el lente compuesto por la sociología de la guerra, lo que supone un abordaje de la guerra como una actividad social por la cual unos grupos humanos tratan, por medio del uso sistemático y potencialmente racional de la violencia, de doblegar la voluntad de otros grupos humanos (Nievas, 2009; pág 28). Al hablar de guerra, por lo general, se retoman los planteamientos de Sun Tzu, como se mencionó unas cuantas líneas atrás en el marco teórico, al igual que otro gran exponente Karl von Clausewitz, militar prusiano, historiador y teórico de la guerra.

De forma concreta, la preocupación de Clausewitz radica en la relación que se da entre los Estados que deciden ser parte de una confrontación armada y, de igual forma, la relación que tiene cada Estado con el pueblo, el gobierno y el territorio. De este modo el análisis se centra en considerar la guerra como la aplicación de la fuerza para resolver disputas entre políticas de Estados diferentes, cuya especificidad involucra el derramamiento de sangre. Cabe resaltar que este análisis de la guerra como fenómeno social proviene del momento histórico y la trayectoria de vida misma de Clausewitz, quien fue motivado por la acción de los ejércitos napoleónicos a lo largo de Europa a principios del siglo XIX (Nievas, 2009).

En el campo de las ciencias humanas, se encuentran aportes valiosos para abordar la guerra y el Ejército de manera simultánea. Dentro de estos es pertinente mencionar los provenientes de Max Weber (1964), quien presenta al Estado como el encargado del monopolio de la fuerza y de la posibilidad de la coacción, por ello se crean y desarrollan entidades como la Policía y/o el Ejército, para controlar y ejercer dicho monopolio. Lo

anterior se hace con el fin de generar y mantener la legitimidad misma del Estado respecto a los ciudadanos que posee en su territorio y a otros Estados.

Es de este modo que se da una dominación legal, por parte del Estado, a sus ciudadanos por medio del establecimiento de una burocracia, de la división del trabajo y la división de oficios, cuya función se centra en la producción y reproducción de una legitimidad que asegure una determinada ideología proveniente del mismo Estado. Es decir, que se generan una serie de mecanismos que posibilitan que un grupo de individuos (ciudadanos) se comporte de acuerdo a una serie de normas establecidas por el Estado. Aquí es donde se instaure una suerte de extensión o trabajo mancomunado de la burocracia, de la división del trabajo y la división de oficios para coaccionar a los ciudadanos, representada en la Policía (quienes se ocupan de dicha coacción al interior del territorio del Estado) y el Ejército (quienes se ocupan de dicha coacción y legitimidad de un Estado específico respecto a otros Estados).

La particularidad o foco que da Weber al Ejército se centra en que este es una forma de burocracia que permite, de manera legal, ejercer y mantener la legitimidad del Estado con los ciudadanos. De igual forma la guerra es un fenómeno que se da entre dos o más Estados por imponer y perpetuar una serie de normas propias, donde la única solución es la coerción proveniente de cada uno de los Ejércitos de los Estados involucrados (Weber, 1964).

Asimismo se encuentra a Charles Tilly, quien enmarca su estudio en la creación del Estado moderno, suponiendo a este como una organización con poder coercitivo que se vale de medios militares (Ejército) para mantener su legitimidad. Partiendo así de una lucha constante por la extracción y acumulación de capital en un territorio determinado y con una población específica, con lo cual el Estado se encarga de brindar protección a la población que se encarga de la extracción.

También destaca la guerra, siendo esta un proceso de eliminación de rivales (dentro y fuera de un territorio) por adueñarse de cierto capital, cuyo producto secundario es el Estado mismo (Tilly, 1958). Lo que resalta una visión economicista del Estado quien procura el control de los medios de producción, dando así un monopolio de la fuerza como doctrina para la producción y reproducción del Estado mismo. Es aquí donde el Ejército cumple la función o representa el papel del Estado para proteger los intereses del mismo y a los pobladores de su territorio, ya sea con amenazas externas (otros Estados) o con amenazas internas (revueltas internas).

En este punto se aprecia que la guerra como fenómeno tiene la particularidad de conjugar dos visiones o propósitos de las esferas de la vida, siendo el primero de carácter político y el segundo de carácter económico. No obstante, el componente social que se le atribuye es la participación misma del Estado, representado en sus Fuerzas Militares, y la relación que este tiene con sus ciudadanos, el territorio, su legitimidad y otros Estados, lo que vislumbra una relación estrecha entre la creación de los Estados-Nacionales y el desarrollo mismo de las guerras entre los siglos XV al XIX e incluso la primera mitad del siglo XX.

Si bien lo anterior es un recorrido por los inicios y principales exponentes de la preocupación de la sociología por acercarse a la guerra como un fenómeno determinado. Es preciso establecer que estos inicios abordaron la guerra como un fenómeno que se da al confrontarse dos Estados o más entre sí, lo que ha originado un debate sobre el análisis de nuevas formas de confrontación entre seres humanos. Por una parte están los adeptos a una línea de pensamiento neo-Clausewitziano la cual supone adicionar ciertas particularidades al análisis de la guerra realizado por Clausewitz, para que este pueda analizar las nuevas formas de confrontación entre humanos (piénsese en guerras civiles, insurgencia, guerrillas, entre otros). Asimismo se encuentra otra propuesta, que proviene de la construcción de nuevas formas de abordar estos nuevos fenómenos, argumentando que es necesario dar cuenta del

surgimiento de nuevos conflictos bélicos que escapan al análisis “tradicional” de la guerra y, de igual forma, proponer una nueva herramienta conceptual para analizar y dar cuenta de estos nuevos fenómenos bélicos.

Para dar cuenta y profundizar en la primera línea del debate se retoma la propuesta de Ian Roxborough en su texto “*Clausewitz and the Sociology of War*”, quien considera que el contenido del planteamiento de la noción de guerra de Clausewitz como la continuación de la política por otros medios, la guerra absoluta (todo tipo de esfuerzo para derrotar al enemigo) y la guerra real (que se limita a un objetivo y un alcance) para dar cuenta de los elementos distintivos de la guerra (razón, pasión, suerte) y su correspondencia en la sociedad (Estado, individuos, elementos que surgen en el desarrollo de la guerra), carecen de profundidad o herramientas para analizar las nuevas formas de confrontación bélica entre humanos.

Desde esta nueva perspectiva, se presenta como propuesta del pensamiento neo-Clausewitziano con cinco puntos relevantes que enriquecen, profundizan y permiten el análisis de la guerra en las nuevas confrontaciones bélicas. Primero, una distinción entre las dimensiones de la guerra y los actores e instituciones envueltos en ella; segundo, una nueva dimensión de la guerra que contemple la economía dentro de la guerra (lo mundano); tercero, los tres actores propuestos por Clausewitz (comandante, gobierno, ciudadanos) deben desagregarse; cuarto, la definición de la guerra cercana a la política; finalmente, una definición de política más amplia que la dada por Clausewitz (Roxborough, 1994).

Así pues, se presenta la guerra y el gobierno como productos históricos similares, pues cambian con el desarrollo de la tecnología y la política. Es decir, que si bien la guerra es un hecho social, este no puede considerarse aislado del terreno de la política y el gobierno, pues aquí se avala o no la participación en dicho hecho social. Asimismo, se afirma que la

política interna del Estado tiene gran importancia para explicar una postura material de la guerra y su desarrollo.

Ahora bien, la otra posición del debate, la que asegura que es necesario proponer una nueva herramienta conceptual para analizar y dar cuenta de estos nuevos fenómenos bélicos, encuentra su mayor exponente en Mary Kaldor, quien en su texto “*Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global*” la propone. Aquí se expone que durante las décadas de los 80s y 90s se ha generado un nuevo tipo de violencia organizada propia de la actual era de la globalización, hay una pérdida de autonomía del Estado a causa de convenios internacionales y se presenta una erosión del monopolio de la violencia legítima, lo que trae como consecuencia las nuevas guerras.

Bajo este análisis de los nuevos fenómenos bélicos Kaldor (2001) propone que las nuevas guerras tienen objetivos políticos cuya meta es la movilización política basada en la identidad. La estrategia militar para lograrlo es el desplazamiento de la población y la desestabilización, lo que proporciona la legitimización de diversas formas criminales de enriquecimiento privado y que son fuente necesaria para sostener el conflicto. Las partes enfrentadas necesitan de un conflicto más o menos permanente para reproducir sus posiciones de poder y tener acceso a los recursos (Kaldor, 2001). Una solución a largo plazo de estos nuevos conflictos es posible si se restablece la legitimidad del Estado, su monopolio sobre la violencia legítima, lo que supone al mismo tiempo un proceso político y legal (confianza en las autoridades y la institucionalidad).

Si bien lo anterior se refiere a algunas de las formas en que la guerra ha sido tratada desde la sociología de la guerra, la presente investigación retoma la propuesta de Alan Scott. Desde esta perspectiva, el papel de lo militar, la guerra y la violencia tienen un papel central en la formación de la modernidad, dando cabida a un análisis de la guerra multivariado, por definirlo de alguna manera, que permita comprender a esta como un fenómeno social,

brindando diversas dimensiones como un planteamiento, unas motivaciones, una ejecución, una táctica, entre otras, referida como una actividad social y un acto político (instrumento político), para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001). Por lo cual este trabajo no se enmarca en alguna de las posturas del debate, busca más bien aplicar los elementos en común que presentan ambas corrientes, como la relación entre el Estado y la guerra, la relación de la política y la guerra, las particularidades de los conflictos bélicos actuales que demandan un esfuerzo por analizarlos desde una perspectiva sociológica que debe ajustarse a la especificidad misma una guerra como fenómeno fluctuante.

Con los elementos expuestos líneas atrás, se da cabida a un análisis multivariado de la guerra, que permite entenderla como un fenómeno social, con diversas dimensiones (significado, motivaciones, ejecución, táctica, entre otras), siendo una actividad social y política, para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001). De igual forma, el Ejército será entendido no solo como parte de las Fuerzas Militares cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional del Estado (en este caso, el colombiano), bajo la consigna de legitimidad (Constitución política de Colombia, 1991; art 217), sino también como una forma de burocracia que representa al Estado y que posee la potestad de hacer y desarrollar la guerra entendida, desde la apuesta teórica de Clausewitz, como una actividad social que incluye la movilización y organización de individuos, que regula ciertos tipos de relaciones sociales y posee su lógica particular, enfocada como un acto político para que prevalezca una forma de proceder (ideología) sobre otra (Roxborough, 1994).

El conflicto colombiano a través del tiempo y el papel de las Fuerzas Militares

El presente capítulo pretende hacer una síntesis de la evolución del conflicto armado en Colombia, de sus diversos actores y un particular énfasis en el papel de las Fuerzas Militares a lo largo de este. De igual forma destaca al conflicto armado como un suceso con múltiples aristas, actores, repercusiones, entre otras particularidades a analizar para, en la medida de lo posible, no repetirlo. Como punto de partida se retoma la propuesta del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el informe “*¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*” emitido en el año 2013 y se alterna con aportes académicos con esta misma lente investigativa, como los de Pizarro, González, Naranjo, Oslender, Llano, entre otros. Dicho escrito es una herramienta práctica para la reflexión, la crítica, el debate y, en general, la construcción de memoria colectiva sobre el devenir histórico de Colombia.

Así pues, el trasegar histórico de Colombia, respecto al conflicto armado, se caracteriza por ser cambiante y muy volátil según el actuar de sus protagonistas y/o el marco internacional en el que se ve inmerso. Es por ello que el presente texto retoma los cuatro periodos temporales identificados por el CNMH y agrega las particularidades propias de las Fuerzas Militares para situar al lector en un contexto histórico, político, económico y social dando herramientas para el entendimiento y resolución de la pregunta investigativa transversal de esta trabajo: ¿cómo ha evolucionado el concepto de guerra en Colombia entre 1998 y 2014 y cómo se reflejan esos conceptos cambiantes en la formación de los militares?

Los cuatro periodos a exponer comprenden desde 1958 hasta el 2014, siendo el primero caracterizado por la transición de la violencia bipartidista a una violencia subversiva (1958-1982); el segundo es determinado por una expansión territorial, política y militar de las guerrillas, la aparición del paramilitarismo, la irrupción del narcotráfico, la nueva Constitución Política de 1991, entre otros acontecimientos que tuvieron lugar entre 1982 y 1996; el tercer momento se enmarca en el recrudecimiento e intensificación del conflicto

armado entre 1996 y 2005; el cuarto periodo, que va desde 2005 a 2014, se destaca por la reconfiguración de los actores del conflicto y el optar por una salida política para el mismo.

De la contienda bipartidista a la subversión (1958-1982)

Los antecedentes y principales hechos en este periodo de tiempo son relevantes para entender la trayectoria y el devenir de la actualidad y pasado reciente del conflicto armado en Colombia, en tanto son la herencia de la violencia, la exclusión y el inicio de los enemigos internos. Es así como la contienda bipartidista y el Frente Nacional, sumados a los intentos fallidos de una reforma agraria y de la tenencia de la tierra, fueron el ambiente propicio para dar continuidad a confrontaciones armadas y una fuerte tensión política y social en el territorio nacional.

El punto de partida de este periodo es el inmediatamente posterior al conocido como la “Violencia” (1946-1958), en el cual los miembros del aparato burocrático estatal, del sistema de justicia y las Fuerzas Armadas se afiliaban a uno de los dos partidos políticos tradicionales en Colombia -liberales o conservadores- (CNMH, 2014, pág 112.). Esto no supondría ningún riesgo más allá de dirimir disputas ideológicas, la tenencia del poder, sistema económico a implementar y demás labores concernientes para el Estado, provenientes de aquel partido que asumiera la conducción de las instituciones políticas del país. Sin embargo, esta disputa por el acceso y control de poder se llevó al extremo de valerse de las armadas y la violencia como medio para acceder a él, opacando el ejercicio democrático y siendo el punto de partida para agrupaciones armadas de corte paramilitar como la policía chulavita y los pájaros, afiliados a corrientes conservadoras.

En este contexto de una disputa armada por el poder y sus subsecuentes consecuencias de violencia bipartidista, tales como pérdidas materiales, despojo, asesinatos, enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y actores al margen de la ley, bajo el mandato del

aquel entonces presidente conservador Laureano Gómez (1950-1951) y su sucesor Roberto Urdaneta (1951-1953) surge una singularidad histórica. El general Gustavo Rojas Pinilla, con el apoyo de las élites partidistas ejecutaron un golpe de estado para la toma del poder con el fin de pacificar el país y fortalecer las instituciones democráticas, logrando así la presidencia de la república (1953-1957). Rojas ofrece amnistía a las autodefensas campesinas y guerrillas liberales, además de una serie de despliegues de operativos militares para aquellos quienes no se acogieran a la deposición de las armas. También un acuerdo para la sucesión del poder alternando entre Liberales y Conservadores, el mandato presidencial y la paridad burocrática, cada cuatro años conocido como el Frente Nacional (1958-1974 (Grajales, 2011).

Respecto a las disposiciones militares en este periodo de tiempo contemplado entre Rojas Pinilla y el Frente Nacional se destacan estrategias de contención del comunismo, represión a grupos insurgentes, recuperación del territorio e injerencia del Estado por medio de retomas militares en los territorios. En cuanto a la contención del comunismo se presenta la adhesión a una mirada negativa a este planteamiento, proveniente de la coyuntura internacional de la Guerra Fría y los triunfos revolucionarios en China (1949) y Cuba (1959), suponiendo que el ascenso de esta corriente de pensamiento al poder perjudicaría aún más a la nación. La represión y recuperación del territorio por vía militar, sumadas a la incapacidad del Frente Nacional de dirimir las disputas bipartidistas, la inserción de nuevas corrientes en participación política y la dificultad de desvertebrar las relaciones de gamonales y poderes locales con grupos armados cercanos a sus partidos (CNMH, 2014, pág 117.), hicieron difícil la labor pacificadora de los primeros gobiernos del Frente Nacional.

Con un panorama tan complejo como el descrito de manera somera en las líneas anteriores, Alberto Lleras Camargo en 1959 solicita ayuda al gobierno norteamericano bajo la administración de Dwight Eisenhower. Es así como surge el informe preliminar el 27 de enero de 1960 por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde se caracteriza la

violencia en el país, sus actores y posibles soluciones militares y sociales para el devenir de la nación. La violencia se define como una tendencia predominantemente criminal con un potencial de transformación a una violencia subversiva por lo cual, se sugiere, reducir la criminalidad por medio de una fuerza móvil contrainsurgente y el emprendimiento de reformas sociales, económicas y políticas (Grajales, 2011).

Para 1964 se diseña e implementa el Plan Lazo como alternativa para pacificar el país y superar el periodo de violencia vivido, que materializó la autonomía de los militares en el manejo del orden público, con el fin de despolitizar a las Fuerzas Militares y hacer énfasis en su papel como garante del régimen bipartidista y no como un partidario del mismo. Este plan militar, de la mano de la política antisubversiva estadounidense, pretendía la ejecución de acciones cívico-militares y de reformas estructurales para mitigar y erradicar la violencia. Es decir, la acción militar hacía parte de una intervención integral, como extensión y representación del Estado para atender con sus servicios a las regiones más afectadas por la violencia (CNMH, 2014, pág 121.). El Ejército debía asumir una nueva mirada respecto a los campesinos, sustentada en la no participación política y como una extensión del Estado, asumiendo que los pobladores del campo no eran cómplices de los grupos insurgentes, sino víctimas que necesitan ayuda para superar los problemas que la violencia les ocasionaba.

Con estas acciones de represión y recuperación territorial del Estado surgen, en periodos muy similares, varios actores centrales en el conflicto armado de Colombia. Es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1962 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967 que, guardadas proporciones, compartían tres pilares fundamentales en su lucha. El primero, las tradiciones políticas y armadas propias del territorio donde se ubicaban; segundo, la incidencia en sectores sindicalizados y/o zonas periféricas de campesinos, generalmente obres; tercero, condiciones topográficas difíciles y estratégicas para acceder al territorio. Poco

después surge el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1970, guerrilla caracterizada por mostrarse más cercana al país urbano, aunque seguían una línea de reivindicación de la democracia y causas sociales como respuesta, a lo que suponían, un fraude en la contienda electoral para la disputa presidencial de 1970 (Pizarro, 2012).

Para enfrentar la beligerancia y reforzar la ofensiva militar se declaró el Estado de Sitio (Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia de 1886) con el objetivo de solucionar, por parte del Gobierno del Frente Nacional, todo tipo de situaciones que alteraran el orden público, incluyendo desde protestas urbanas hasta acciones guerrilleras. Así pues, se restringieron derechos y libertades, invocando la seguridad nacional, fortaleciendo la autonomía de las Fuerzas Militares dentro del Estado (CNMH, 2014).

Tas el periodo anterior se posesiona Alfonso López Michelsen (1974-1978) como presidente suponiendo una transición positiva para mantener el desarrollo económico y crecimiento sostenido, que paralelamente, se dio al agitado contexto político y social que representó el Frente Nacional. Sin embargo, la economía desaceleró y la inflación aumentó (CNMH, 2014, pág 131.), generando así, con la concurrencia de los aspectos sociales y políticos, un paro cívico el 14 de noviembre de 1977. Este hecho es relevante pues significó un símbolo de desestabilización social y político leído como oportunidad o amenaza para la guerra por parte de los actores armados al margen de la ley y para el Estado respectivamente.

Para el siguiente periodo presidencial (1978-1982) bajo el mando de Julio César Turbay y con un descontento generalizado por la situación de violencia, que al parecer, había sido superada por las disputas bipartidistas y tomaba forma de reclamaciones sobre el agro (fallo de reformas agrarias), la economía y la participación política, serían el campo perfecto para la proliferación de actividades ilegales, destacando el narcotráfico. Es así como entran economías alternas (ilegales), un ascenso de clases emergentes amparadas en estos capitales y la penetración de mafias en la vida política regional y local de la Nación (CNMH, 2014).

La respuesta del gobierno fue predominantemente militar, se puso en marcha una política de seguridad amparada en el Estatuto de Seguridad Nacional. Esto fue precedido por una comunicación dirigida desde las Fuerzas Militares, tras los hechos en 1977, clamando por la adopción de medidas que les permitiesen afrontar la defensa de la nación. Es así como Turbay auspició una doctrina y una normatividad que materializó el concepto de Doctrina de Seguridad (la necesidad de proteger la nación de cualquier adversario) y el de enemigo interno o cualquier oponente político que actúe dentro de las fronteras nacionales (CNMH, 2014, pág 132.). De este modo se amplió la influencia y autonomía militar que legitimaban las acciones represivas por mantener la seguridad nacional, en palabras del propio Turbay: “en los casos extremos en los que ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce a la anarquía generalizada, las Fuerzas Armadas se ven precisadas a ejercer el poder” (CNMH, 2014, pág 133.).

Aunque pareciere irrisorio, tras experimentar el bipartidismo extremo, la crisis social, económica y política que desencadenaron en la Violencia y los esfuerzos del Estado por mitigar todo ello, el país estaba por ahondar más en la complejidad misma que ya poseía. La disputa política llevada a una disputa violenta por el acceso al poder en el país, la represión militar y el desafío de mantener el orden al interior de la nación, llevaron a la aparición de nuevos actores: paramilitares y narcotraficantes; el fortalecimiento de otros, las guerrillas, y una mayor disputa por el dominio del territorio, el acceso a la política y el respaldo de la población.

Aumento de jugadores, el fortalecimiento guerrillero, los paramilitares y el auge narcotraficante (1982-1996)

Al finalizar el mandato de Turbay el panorama nacional era similar y distinto al mencionado en el apartado anterior. Similar en tanto que la contienda bipartidista y el Frente

Nacional, sumados a los intentos fallidos de una reforma agraria y de la tenencia de la tierra, fueron el ambiente propicio para perpetuar confrontaciones armadas y mantener fuerte tensión política y social en el territorio nacional. Distinta en cuanto los actores cambiaron de nombres propósitos y/o fortalecieron su actuar político y militar ahondando en procesos violentos, economías paralelas a las de la ley y cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Belisario Betancur asumiría la presidencia para el periodo de 1982 a 1986 y por su accionar agitaría aún más las aguas del panorama de la nación. Con la política para la protección de los Derechos Humanos del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Jimmy Carter (1977-1981), el gobierno colombiano optó por dialogar y encontrar una salida negociada a la confrontación armada que sostenía con distintos grupos ilegales en el territorio. Al mismo tiempo, las FARC aumentaron su número e iniciaron una estrategia de confrontación total y ofensiva en los territorios en los cuales influían como respuesta al Estatuto de Seguridad de la administración Turbay. Estos dos factores generaron malestar en las élites locales y regionales a lo largo de la geografía nacional.

La negativa a ceder terreno político, con la incursión de nuevas corrientes ideológicas, principalmente de izquierda, como la Unión Patriótica (UP), por parte de quienes controlaban la política a nivel local y regional y la incapacidad del Estado de hacer frente en su totalidad a la ofensiva guerrillera, fueron el punto de partida para las autodefensas, que posteriormente se transformarían en los paramilitares. Así pues, se consideraba que el poder central era incapaz de hacer frente a las guerrillas al negociar con ellas, dejando así en sus propias manos o propios medios la defensa local y regional del territorio a sus pobladores, siendo esto una responsabilidad del Estado y, a su vez, la excusa perfecta para justificar grupos paramilitares (Romero, 2003).

Con estos nuevos componentes en el contexto nacional, se desarrolló una particular relación entre los militares y las élites regionales. Esto fue posible al compartir un interés en

común: evitar la proliferación de las guerrillas y, de ser posible, erradicarlas del territorio por cualquier medio posible, en especial, las armas, al creer que la incursión de la guerrilla y la izquierda en el gobierno supondrían el peor de los resultados para el país. Es así como estas relaciones cívico-militares generaron reciprocidades y comprometieron la autonomía alcanzada por las Fuerzas Militares como representantes del Estado en periodos anteriores, ya que se vieron involucrados en la preparación y/o patrocinio de estos grupos (Velásquez, 2007).

Lo anterior trajo consigo tres hechos para la administración Betancur y posterior administración de Virgilio Barco (1986-1990) que guiarían el devenir del conflicto. El primero de esos hechos fue la conformación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), el cual presumía ser un grupo armado conformado para evitar el secuestro de sus financiadores y erradicar esta práctica adoptada por las guerrillas para financiar sus causas. Con la sospecha de la participación militar en el MAS, Betancur, por medio de la Procuraduría General de la Nación, reconoció que 69 de los 163 miembros de ese grupo eran integrantes de las Fuerzas Armadas (CNMH, 2014, pág 137).

El segundo hecho destacado fue la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 por parte del M-19, grupo que se encontraba en proceso de diálogo con el gobierno en ese entonces. Dicho suceso significó el fracaso de los diálogos entre las partes y forzó al gobierno a una retoma del Palacio por medios militares, tras lo cual quedaron claras las intenciones del M-19 de privilegiar los actos bélicos sobre los políticos.

Finalmente, el tercer hecho, fue el ya mencionado fortalecimiento de otros grupos guerrilleros, ya que entre 1981 y 1986, el EPL pasó de tener dos frentes a contar con doce; el ELN paso de tres frentes a diez; y las FARC, de diez a treinta y uno (CNMH, 2014, pág 137.).

Ahora bien, en la administración de Virgilio Barco, tras el fracaso en las negociaciones de paz del mandatario anterior, se caracterizó por plantear un modelo

despolitizado, institucionalizado y tecnocrático para alcanzar la paz. Por ello, la inversión nacional se centró en obras de infraestructura y se procuró un acercamiento del centro del país con las demás regiones de la geografía. Sin embargo, el presidente de turno no contó con el apoyo de la clase política ni de la opinión pública, dificultando así el objetivo de descentralizar el Estado y que llegara de forma eficaz a las regiones más apartadas del centro del país.

De igual forma, distintos sectores de las Fuerzas Militares insistían en defender y apoyar la existencia de grupos de autodefensas. Una muestra de ello fue el Manual EJC-30 (reglamento de combate de contraguerrilla), aprobado por Óscar Botero, entonces comandante del Ejército en 1987, en el cual se reiteraba a las Juntas de Autodefensas como uno de los principales apoyos en la lucha contrainsurgente (CNMH, 2014, pág 140.). Con un precedente así, por ejemplo, algunos batallones militares en el Magdalena brindaron apoyo logístico a algunos grupos de autodefensas que habían nacido para protegerse de la avanzada guerrillera. También, obtuvieron apoyo de las principales cabezas del narcotráfico para el momento tales como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jairo Ortega, entre otros.

Este tipo de ejemplos puso sobre la escena nacional el intrincado panorama y el entrecruzamiento de diversos actores en contra de un enemigo que suponían común: las guerrillas. Salta a la vista la confluencia de intereses de élites económicas locales y regionales, los de los narcotraficantes y de sectores de las Fuerzas Militares; sin embargo, la disputa por la tenencia de la tierra y el acceso a la política significó una dualidad para el Estado respecto a los paramilitares. Por un lado aliado en la lucha contrainsurgente y por el otro lado enemigo en la lucha contra el narcotráfico, siendo una contienda insostenible para el Estado, ya que al tener dos frentes de combate (contrainsurgencia y narcotráfico) se vio en medio de masacres, asesinatos a políticos, sindicalistas, líderes sociales y un desdibujamiento de los límites entre combatiente y no combatiente.

En este proceso de reconfiguración social y cultural mediado por la violencia y los distintos actores, se puede considerar un cambio del misticismo del guerrillero de los años sesentas y setentas, bajo la consigna del acceso a la tierra, apertura democrática y descentralización estatal, que fue reemplazado por el pragmatismo del narcotraficante como referente de movilidad social (CNMH, 2014, pág 145.). En medio de la confrontación del Estado y el Narcotráfico, el primero se afilió a la política de la guerra contra las drogas promovida por el gobierno de Estados Unidos y comenzó no solo una confrontación total y de frente contra esta actividad ilegal, sino que también impulsó la extradición de aquellos capturados en ejercicio o allegados de dicha actividad. Esto fue causa de numerosos atentados por parte de los narcotraficantes (carro bomba contra el edificio del DAS, atentado contra el diario El Espectador, entre otros) y un recrudecimiento de la violencia en el país.

Aunque el panorama en términos de violencia se exacerbaba, la guerrilla del M-19 se acogió al proceso de paz propuesto por Virgilio Barco y depuso las armas. Para inicios del mandato de César Gaviria (1990-1994), el M-19 y el gobierno firmaron un acuerdo de paz dando origen a una opción política distinta (Alianza Democrática M-19) con alta influencia nacional e injerencia durante la Asamblea Nacional Constituyente que tendría lugar en 1991. Esta constituyente representó, en medio del conflicto, una luz de esperanza para superar rencores y aceptar diferencias proclamando el 4 de julio de ese año que era una carta de navegación para la construcción de un Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la democracia, las garantías políticas y la convivencia pacífica en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y multicultural (CNMH, 2014, pág 149.). De igual forma se instauró la descentralización política y administrativa para que el Estado llegase de forma efectiva y eficaz a cada región de la nación, representada en la elección popular de gobernadores.

Como hecho destacado, referente a las Fuerzas Militares y su acción tras la constituyente y el mandato de Gaviria, hay dos momentos claves para entenderlas. El primero

fue que la nueva constitución instauró límites a los estados de excepción bajo casos de guerra (contra otro Estado, civil o por invasión), situaciones extraordinarias (desastres naturales), perturbación grave del orden interno o cualquier caso que el Estado así lo considere. El segundo fue el nombramiento de un civil como ministro de Defensa, cargo que hasta el momento había sido ocupado por personal militar, dejando clara la subordinación de las Fuerzas Militares al Gobierno nacional (Mejía, 2008).

Con la finalización del periodo de Gaviria, asumiría el timonel nacional Ernesto Samper (1994-1998) bajo condiciones distintas a las esperadas con el cambio constitucional. Esto se debe a una crisis política proveniente de la financiación de la campaña electoral presidencial, pues parte del dinero llegó gracias al narcotráfico y suscitó un proceso judicial para esclarecer quiénes fueron los responsables de dicho acto. Dicho asunto fue llamado el proceso 8000, provocando dudas en la legitimidad del gobierno de turno, generando tensiones en las relaciones con Estados Unidos y un inconformismo en la opinión pública sobre el presidente. Todo esto limitó el margen de acción del gobierno y fue la excusa perfecta de los grupos al margen de la ley para desconfiar en la política y seguir con la opción armada y militar como solución al conflicto.

Renovación y reestructuración militar para una confrontación frontal y el recrudecimiento del conflicto (1996-2005)

Hasta este punto, la mayor constante relatada ha sido la de un conflicto armado e interno que con el paso de tiempo ha aumentado su complejidad y al mismo tiempo el grado de violencia empleado. Desde la lucha bipartidista, el Frente Nacional y los periodos presidenciales posteriores se han dado intentos por buscar una salida pacífica del conflicto y, al mismo tiempo, una confrontación militar con los opositores (por lo general armados) del gobierno. Entre 1996 a 2005 la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de

victimización (CNMH, 2014, pág 156). Ahora las contiendas tomaron un tinte de victoria militar sobre el oponente, se pasó de una persuasión para ganar adeptos a la causa contestataria a una intimidación y agresión, sustentadas principalmente en muerte y destierro como forma predilecta para obtener territorio, tierras y el poder local y regional.

Como se comentó al finalizar el apartado anterior, el presidente Samper y el proceso 8.000 desataron una crisis de gobernabilidad y división interna sobre la administración de la nación. Se trataba entonces de la posibilidad por aprobar o no, una zona de despeje (libre de presencia de las Fuerzas Armadas) para dar inicio a diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, sopesando un probable acuerdo o cediendo un territorio que proyectaría acciones y daría ventaja al grupo guerrillero. Andrés Pastrana (presidente de 1998-2002) tomó exactamente la misma estrategia.

De este modo las FARC combinaron golpes militares a la Fuerza Pública y asediaron las élites locales y regionales valiéndose principalmente del secuestro, la extorción y ataques directos a propiedades. Esto solo puso en evidencia que tanto el gobierno como las FARC desplegaban un discurso político y un accionar militar, una forma de hacer la guerra en medio de la paz (Pizarro, 2012). En cuanto a los diálogos se estipuló la discusión (iniciada en 1999) alrededor del canje de secuestrados de la Fuerza Pública y presos de las FARC, la lucha contra el paramilitarismo y el mantenimiento de la zona de despeje. En términos militares, se puede destacar una superioridad de las FARC reflejada en los continuos ataques a estaciones de policía en municipios al sur del país y la suplantación del Estado en aquellas zonas, ya sea porque el Estado mismo no tenía una presencia activa en el lugar o porque era desplazado por el grupo guerrillero (Ferro & Uribe, 2002).

Un hecho trascendental, en términos militares, fue la retoma de Mitú por parte de las Fuerzas Militares. Si bien este suceso tuvo lugar en 1998 cuando las FARC atacaron el casco urbano de la Mitú (capital del departamento de Vaupés) y tomaron control de la zona al

imponerse sobre el personal de las Fuerzas Armadas presentes en el lugar, por primera vez un grupo guerrillero tomaba control de una ciudad y opacaba el accionar militar. Bajo esta toma el gobierno responde con una contraofensiva dotada de personal especializado en combate apoyado con respaldo aéreo logrando la retoma de la capital y demostrando que las Fuerzas Militares tenían la capacidad logística y de fuego para contrarrestar el accionar guerrillero. Este hecho fue fundamental en tres aspectos: cambió la noción de una guerra de guerrillas a una guerra por posición (dejar de contrarrestar grupos insurgentes a la disputa por el control de ubicaciones específicas con intereses particulares); reveló el potencial de las Fuerzas Militares para hacer frente en la disputa con los grupos armados y el quiebre de la ventaja táctica de las FARC. Este hecho fue el detonante para que el gobierno autorizara la zona de despeje e iniciaran los diálogos de paz mencionados líneas atrás.

Al mismo tiempo que el gobierno avanzaba en términos de paz con la guerrilla de las FARC, decidió restablecer un esquema legal para las autodefensas a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994), más conocidas como las Convivir (CNMH, 2014, pág 158.). Así pues, el Ejército Nacional cedió el peso de la lucha contra las guerrillas a las convivir, tras los golpes militares de las FARC entre 1996 y 1998, generando una reconfiguración interna de los grupos paramilitares, quienes concentraron sus esfuerzos en combatir a las guerrillas tras el alto en la lucha contra Pablo Escobar y la pugna interna por el liderazgo. Para 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y para 1997 se reunieron los distintos jefes de los grupos de autodefensas, en algún punto entre Córdoba y el Urabá, para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia provistas de una dirección única y un estado mayor conjunto, definidas como un movimiento político-militar de carácter antiterrorista en ejercicio del derecho de legítima defensa (CNMH, 2014, pág 160.).

Una vez unificadas las autodefensas, se propusieron formular un nuevo contrato social cuya base fuese la defensa de la propiedad privada y la preservación del control territorial, de igual forma ser reconocido como el tercer actor (además del Estado y las guerrillas) de la guerra y forzar una negociación política con el Estado. Asimismo, se originó el Pacto de Ralito, documento que consignaba las pretensiones anteriores y la necesidad de reformar la patria. Dicho documento fue firmado por los jefes del estado mayor de las autodefensas, algunos políticos (gobernantes, alcaldes, concejales, representantes de la cámara) y personal civil, cabe aclarar que esto se realizó al margen de la ley, pues la administración Pastrana desconocía dicho pacto y esto solo fue esclarecido tiempo después con la desmovilización paramilitar y sus respectivas declaraciones a la justicia colombiana (López, 2010).

Es así como en 1999 esta fuerza paramilitar era considerada como un ejército irregular con alto nivel ofensivo expandiendo su influencia territorial por medios violentos y políticos, y afianzamiento de las zonas que controlaban. Con un contexto así el conflicto fluctuó y cobró una nueva particularidad, si en los años ochentas fue la década de mayor esplendor de las guerrillas, la presente lo fue para los paramilitares. Lo anterior significó la ocupación violenta del territorio, la vinculación del narcotráfico en las gestas paramilitares y una estrategia de capturar el poder local y regional para influir en el poder político nacional.

Para la llegada del nuevo siglo la contraofensiva militar no se hizo esperar, pues el Plan Colombia aportó significativamente a la reingeniería de las Fuerzas Armadas de la mano del apoyo de Estados Unidos con tecnología e inteligencia militar. Este plan vinculó a los grupos armados con los dineros del narcotráfico, postulando esto como una de las principales causas del conflicto y permitiendo la adhesión a la política estadounidense de tolerancia cero con las drogas en el mandato de Bill Clinton. Lo anterior se tradujo en inversión extranjera para fortalecer la lucha contra el narcotráfico con un alto énfasis militar, debido a que el 74%

del dinero entrante se destinó a fortalecimiento militar (60%) y policial (14%) (CNMH, 2014, pág 167.).

Con un panorama como el presentado se encuentra el Estado combatiendo dos frentes simultáneamente y las acciones respecto a uno afectan la relación con el otro. Como se mencionó a lo largo de este apartado el conflicto aumentó en su complejidad, pues ahora hay tres actores principales (Estado, guerrillas, paramilitares) que interactúan a lo largo de la geografía de Colombia disputando el control regional y local, el poder político y las actividades económicas (legales e ilegales, principalmente). La relación Estado-guerrillas fue determinada por una doble vía, una suponía una salida pacífica con la deposición de las armas y la inmersión en política, la segunda vía fue la confrontación militar total por la disputa del sur del país.

Respecto a la relación Estado-paramilitares esta tuvo una fluctuación a medida que los paramilitares, bajo la consigna de su derecho a la legítima defensa, incurrieron en masacres y violencia para contrarrestar a las guerrillas y se apoyaban cada vez más en el capital del narcotráfico para su financiamiento. Todo esto ocasionó un detrimento del propósito inicial de ser una fuerza alterna que apoyara la lucha contrainsurgente a ser un adversario más del Estado en la disputa por el control territorial. Finalmente, la relación de los otros dos actores entre sí representó una disputa a capa y espada a lo largo del país, la guerrilla con mayor presencia en el sur y los paramilitares en el norte, se disputaban corredores naturales y zonas donde el control de cada uno era preeminente (Urabá, Meta, Barrancabermeja, Putumayo, entre otras tantas).

Otro aspecto a destacar en este contexto aparece en el marco internacional tras los hechos acontecidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Este atentado al World Trade Center, en Nueva York, impulsó la intolerancia a actividades o grupos que infringieran terror en la población civil justificados en causas políticas, permitiendo vincular al conflicto

armado la amenaza que representaban las guerrillas y paramilitares como narcoterroristas por su financiación y métodos para ejercer el dominio territorial (CNMH, 2014).

Estas caóticas y complejas relaciones entre los actores, el apoyo internacional para combatir las amenazas narcoterroristas y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares generaron la ruptura de negociaciones entre el Estado y las FARC en el 2002 en vísperas de las siguientes elecciones presidenciales. Es en este momento en que Álvaro Uribe asume la presidencia (2002-2006 y 2006-2010) y declara como postura militar la confrontación directa contra la guerrilla y los paramilitares para la recuperación del control territorial y seguridad de la Nación. Así pues, surge la propuesta de gobierno “Seguridad Democrática” como política que guiará los esfuerzos de la nación por una estrategia decidida a ganar la guerra contra los insurgentes, como requisito previo para la viabilidad social, política y económica de la nación (CNMH, 2014, pág 179.)

Con esta propuesta y el Estado combatiendo en dos frentes simultáneamente, se desencadenó una ofensiva a todo nivel (militar, política, judicial, de opinión pública) contra los grupos insurgentes. La modernización de las Fuerzas Militares, la activación de la economía y la ayuda extranjera para combatir la ilegalidad (inicialmente el narcotráfico, luego el terrorismo y su híbrido, el narcoterrorismo) tuvieron como resultado una superioridad bélica respecto a sus contendores. Esto fue posible en la medida que Uribe juntó las preocupaciones de la paz y el desarrollo en el país asegurando que la seguridad, entendida como una estrategia decidida a ganar la guerra contra los insurgentes, era el requisito previo para la viabilidad social, política y económica del País (CNMH, 2014, pág 179.).

Lo anterior también implicó el establecimiento de impuestos extraordinarios para la nación y de igual forma en la legitimidad tanto de la institucionalidad democrática del gobierno como de las Fuerzas Militares. Respecto a la legitimidad del gobierno y su brazo militar flaquearon debido a las presiones por los resultados y los incentivos provenientes de

estos, pues ocasionaron comportamientos criminales en la institucionalidad, cuyo mayor efecto se reflejó en los falsos positivos. Casos en los cuales se presentaban como bajas militares de la confrontación a población civil, con un total de 1.486 investigaciones con 2.701 víctimas de este flagelo (CNMH, 2014, pág 179.).

En el año 2004 se pone en marcha, como estrategia militar de la Seguridad Democrática, el Plan Patriota. Una ofensiva militar que pretendía recuperar el territorio considerado la retaguardia de las FARC (Caquetá y Meta), con una recuperación del territorio y la búsqueda por ganar el apoyo de los pobladores de dicha geografía, con el fin de desarticular los principales corredores estratégicos de movilidad de la guerrilla. Se pretendía entonces la llegada inicialmente de las Fuerzas Militares y luego la de la institucionalidad del Estado (educación, salud, justicia, infraestructura).

La postura del gobierno de fortalecer las acciones contra la guerrilla y aumentar el pie de fuerza de los militares captó la atención de los grupos paramilitares. Los jefes de dicho grupo decidieron iniciar las negociaciones en el año 2004 con el gobierno para tramitar su desmovilización en Santa Fe de Ralito (Córdoba), sin embargo este proceso posteriormente fracasaría como punto final al actor del conflicto armado en cuestión, tema que se profundizará un poco más en la siguiente sección.

Superioridad estratégica, desmovilización paramilitar y reducción de acción guerrillera (2005-2014)

Esta es la última sección de los apartados históricos a tratar en el presente texto y al parecer el panorama continúa igual de complejo como aquel con el que se inició el presente capítulo. Es así como este periodo inicia con la aprobación de la ley de Justicia y Paz (2005) como marco jurídico para facilitar el proceso de desmovilización de los paramilitares y la recuperación territorial por parte del Estado, tras la profundización de la guerra contra las

guerrillas (pues se les negaba el carácter político e ideológico que poseían en los 80s). Este proceso supuso la reducción de la confrontación a un solo enemigo: la guerrilla. Si bien la deposición de las armas, por parte de los jefes de los paramilitares, no tuvo los efectos o duración deseados para el país fue un acercamiento por poner fin al conflicto.

Cabe resaltar la aplicación del Plan Consolidación (Anexo 1.10) como accionar militar durante la finalización del primer periodo presidencial y el inicio del segundo periodo por parte de Álvaro Uribe. Se trataba de la proyección del Plan Patriota, para que el territorio recuperado por las Fuerzas Militares empezara a ser intervenido por el Estado, una vez se establecían las condiciones de seguridad se iniciaba a implementar obras de infraestructura, educación, salud y justicia para el desarrollo mismo del territorio. Esta estrategia pretendía ganar el apoyo de la población y dar legitimidad al Estado al hacerse presente en dicho lugar.

Para 2008 y 2010 se presenta un rearme paramilitar y el accionar criminal en 2011 y 2012, se trataba de organizaciones al servicio del narcotráfico, carentes de cualquier contenido político (CNMH, 2014, pág 186.). Son un fenómeno fragmentado, atado a las lógicas regionales con fines de control territorial, político y social, como rezagos de la desmovilización paramilitar. Su principal actividad económica se basa en el narcotráfico e incursión en minería como fuente de financiación militar.

Aunque el poder bélico y táctico militar sea superior en las Fuerzas Armadas frente a la guerrilla, no fue posible dar un golpe final que pusiese fin, valiéndose de las armas, al conflicto. En gran medida se debe a la rápida adaptación de la guerrilla a actuar en regiones de difícil acceso e incluso a transitar entre las fronteras con los países vecinos como Ecuador y Venezuela (Pizarro, 2012). Lo que trajo como consecuencia una profundización en las lógicas de dominio territorial donde la guerrilla se refugió y una negativa para obtener una salida negociada para deponer las armas. Al mismo tiempo, esto desató tensiones en las relaciones con los países vecinos tras la incursión de operativos militares en tierras

extranjeras, en especial la operación contra el campamento de Raúl Reyes, un jefe guerrillero, en Ecuador; y con Venezuela tras las declaraciones del presidente que vinculaba al vecino país con la protección de la guerrilla en dicha nación (CNMH, 2014).

Juan Manuel Santos (2010-2014) como nuevo presidente y ex ministro de defensa introduce un cambio sustancial, continuando con la ofensiva militar contra las guerrillas pero centrando la atención en la solución política del conflicto y la prioridad en reconocimiento de las víctimas. Esto se ratifica con la implementación de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) y el posterior inicio de diálogos de paz con las FARC en la Habana, Cuba (2012).

Respecto a la ofensiva militar se destacan dos hechos fundamentales que permitieron, en gran medida, una salida negociada a la confrontación con la guerrilla de las FARC. El primero fue la operación Sodoma que tuvo lugar en septiembre de 2010, en la cual se localizó y dio de baja al máximo jefe de dicha guerrilla (Jorge Briceño conocido como Mono Jojoy). El segundo fue el resultado de la operación Odiseo, en la cual se eliminó al nuevo comandante de la guerrilla Guillermo León Sáenz (Alfonso Cano), estos dos hechos significaron un duro golpe a la guerrilla de las FARC, desestabilizando su organización interna y manifestando el poder táctico, estratégico y de inteligencia militar que respaldaba la postura del gobierno. Es así que la superioridad militar se hizo evidente y forzó (tras lo visto a lo largo de este pequeño recuento histórico) la búsqueda de una salida negociada del conflicto.

Algunas conclusiones

Lo expuesto a lo largo de este capítulo no pretende ser un recuento exhaustivo sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Si bien existen autores que se enfocan en los detalles al interior del conflicto, como aportes significativos para el entendimiento del mismo,

desde sus diversos actores y relaciones hace falta mayor profundidad en lo concerniente a las Fuerzas Militares como actores en medio de la confrontación. En la literatura ha existido un especial interés en las víctimas (Naranjo, 2001; Oslender, 2006), y en los diversos grupos armados incluyendo a guerrillas (Pizarro, 1991; Ferro & Uribe, 2002; Llano, 2009) y paramilitares (Velásquez, 2007; Romero, 2003; Cubides, 2004).

De igual forma solo algunos trabajos se han orientado en las Fuerzas Militares como actor (Gantiva, 2009; Grajales & Rodriguez, 2011; León, 2005; Mejía, 2008), pero esos trabajos previos se han enfocado en las distintas instituciones de formación educativa del ejército, la evolución de las estrategias de guerra en Colombia, el servicio militar como vivencia y/o los imaginarios que existen acerca de las FF.AA. Así pues el desarrollo a lo largo del texto pretende dar al lector una visión general del conflicto y su desarrollo para identificar el papel de las Fuerzas Armadas. Esto obedece a lo complejo del devenir histórico del país y como este influye en la aparición, desaparición e interacción de diversos actores, en especial las Fuerzas Militares que fluctúan entre la sujeción al gobierno de turno y la autonomía para hacer frente al surgimiento de los distintos grupos al margen de la ley.

Inicialmente se destaca el papel de las Fuerzas Militares como partidarias del gobierno de turno y el brazo armado para imponerse sobre la ideología contraria a la promulgada por el Estado. Es de este modo que se supedita a las Fuerzas Armadas a tomar un rol activo en el conflicto respaldando el accionar del gobierno, pues se ven identificadas con la posición ideológica de turno, a grado tal de valerse de la fuerza para imponer dicha ideología como legítima. Al mismo tiempo, es posible observar que las Fuerzas Militares, tras un desgastado periodo de violencia, previo al Frente Nacional, se hacen con el poder, por medio de un golpe de estado, e instauran la alternancia de la tenencia del poder por las principales corrientes.

Dicha alternancia del poder proveniente del Frente Nacional, lo que supuso una intervención más autónoma y menos partidista por parte de las Fuerzas Militares. Se destacan estrategias de contención del comunismo, represión a grupos insurgentes y la recuperación del territorio mencionado anteriormente. Otro de los puntos destacados, fue la entrada en vigencia, cada que fue necesario para enfrentar la beligerancia y reforzar la ofensiva militar, del Estado de Sitio. Fórmula para solucionar, por parte del Gobierno del Frente Nacional, todo tipo de situaciones que alteraran el orden público (incluyendo desde protestas urbanas hasta acciones guerrilleras).

No fue hasta el cambio de mando siguiente, en la presidencia de Lleras Camargo que se instaura una fuerza móvil contrainsurgente con el Plan Lazo como alternativa para pacificar el país, materializando la autonomía de los militares en el manejo del orden público con el fin de despolitizar a las Fuerzas Militares y hacer énfasis en su papel como garante del gobierno y no como un partidario del mismo (Grajales & Rodriguez; 2011). Este plan militar pretendía la ejecución de acciones cívico-militares para mitigar y erradicar la violencia. La acción militar hacía parte de una intervención integral, como extensión y representación del Estado.

Lo anterior se mantuvo como constante en las Fuerzas Militares hasta unos periodos presidenciales posteriores (el de Turbay y el de Barco), un constante ir y venir entre autonomía y supeditación al Estado. Lo destacable en este punto tiene que ver con la relaciones cívico-militares, pues al compartir un interés en común (evitar la proliferación de las guerrillas y, de ser posible, erradicarlas del territorio por cualquier medio posible) generaron reciprocidades y comprometieron la autonomía alcanzada por las Fuerzas Militares como representantes del Estado en periodos anteriores, ya que se vieron involucrados en la preparación y/o patrocinio de grupos de autodefensas en las regiones y territorios locales.

Esto conllevó la definición de un enemigo interno (inicialmente las guerrillas, luego el paramilitarismo y el narcotráfico) que debía ser combatido desde las posibilidades de las

Fuerzas Militares para obtener la paz, la soberanía del estado y la recuperación del territorio. Es por ello que se llevaron a cabo ajustes en las causas a combatir de dichos grupos, que se ajustaron según al planteamiento internacional (principalmente Estados Unidos), para combatirlos y contar con el apoyo financiero y táctico extranjero. Al mismo tiempo se modernizaron las Fuerzas Militares (tecnológicamente, tácticamente y mejor preparación del personal) con el fin de enfrentar, mitigar, reducir y superar al enemigo interno, cualquiera que fuera, para obtener la paz por cualquier medio necesario, en este caso fue la guerra.

De igual forma se consideró al conflicto como una guerra irregular y un tipo singular de acción social. Afirmando así que a la luz de los hechos y evidencias acumulados, es posible ponerse de acuerdo en que la intensidad de la guerra asociada a su duración, y la diversidad de las violencias que se le confieren, están creando una nueva concepción del territorio, logrando estrategias de enfrentamiento táctico como ocultar las acciones y sorprender en el campo de batalla (Fuerzas armadas). Finalmente, se aboga por la comprensión de las FARC como un ejército insurgente irregular y la internacionalización del conflicto al ser catalogado como guerra irregular (implementación y respeto del Derecho Internacional Humanitario-DIH) (Torres, 2008).

Con lo anterior se concluye que los códigos que definen lo sagrado y lo profano en la vida social, con un limitado grupo de estructuras narrativas dentro del discurso de la sociedad civil, forman el andamiaje cultural por medio del cual una política militar puede ser legítima y pensable (Cuellar, 2009). Es decir que el Estado mismo es el encargado de legitimar el actuar de las Fuerzas Militares que se encuentran bajo su mando. El poder militar está supeditado al poder civil o como se sostenía en el primer capítulo de este texto: es el Estado quien posee la potestad de hacer y desarrollar la guerra entendida, desde la apuesta teórica de Clausewitz, como una actividad social que incluye la movilización y organización de individuos, que regula ciertos tipos de relaciones sociales y posee su lógica particular,

enfocada como un acto político para que prevalezca una forma de proceder (ideología) sobre otra (Roxborough, 1994).

La capacitación y mejora de personal y equipos de las Fuerzas Armadas, trajo consigo un incremento progresivo en la superioridad contra el enemigo. Tras varias décadas de conflicto, dispuestas de manera corta en las líneas anteriores, la violencia llegó a picos inimaginables antes de lograr que las partes se sentaran a dialogar de una posible salida política y no armada del asunto. Así las cosas, se ha observado cómo el papel guerrillista de las Fuerzas Militares y brazo armado del Estado ha jugado un papel central en el conflicto, esto se debe a que posee el personal de la profesión de las armas y la legitimidad para el uso de estas; sin embargo, la aplicación de las armas (en el deber ser) se ajusta a los lineamientos que el gobierno le da. Piénsese en un entrenador (Estado) que guía a sus jugadores (Fuerzas Militares) para obtener la victoria (paz, soberanía) y que al momento de inicial el juego (disputa política y arma) los jugadores por momentos se acogen al planteamiento técnico del entrenador y en otras ocasiones actúan bajo la lectura propia que les da su preparación y el desarrollo mismo del juego para lograr el tan anhelado triunfo.

Todo el proceso histórico que ha atravesado el conflicto en Colombia permite ver como las Fuerzas Militares han cambiado su acción debido a la cercana relación con la política del Estado. Esto no es fortuito, en tanto que el Estado es el encargado del monopolio de la fuerza y de la posibilidad de la coacción, que posee entidades como la Policía y/o el Ejército para controlar y ejercer dicho monopolio (Weber, 1964).

A continuación, se hará mayor énfasis al juntar la especificidad tanto temporal de la pregunta de investigación (1998-2014) como del direccionamiento militar, con el fin de dar cuenta de la noción de guerra que se ha formulado y reformulado gracias a las dinámicas mismas del conflicto y sus actores.

La Escuela Superior de Guerra una visión institucional

En los dos capítulos anteriores se abordaron aspectos cruciales para llegar al grueso de la presente investigación. Como punto de partida, se contextualizó al lector en el debate académico sobre el fenómeno de la guerra, cómo se ha estudiado y más importante, cómo se ha conceptualizado, dejando claro que se retomará un análisis multivariado de la guerra. Es decir, que esta obedece a diversas dimensiones (significado, motivaciones, ejecución, táctica, entre otras), siendo una actividad social y política, para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001).

Además, se hizo énfasis en que el Ejército no solo forma parte de las Fuerzas Militares y cuya misión es la defensa de la soberanía y el orden constitucional, sino también como una forma de burocracia que representa al Estado y que posee la potestad de hacer y desarrollar la guerra entendida, desde la apuesta teórica de Clausewitz, como una actividad social que incluye la movilización y organización de individuos, que regula ciertos tipos de relaciones sociales y posee su lógica particular, enfocada como un acto político para que prevalezca una forma de proceder (ideología) sobre otra (Roxborough, 1994).

Adicional al aspecto teórico, también se reconstruyó de manera condensada, el contexto histórico que ha acompañado el desarrollo mismo del conflicto armado y cómo este ha influenciado tanto el accionar político del Estado como en el accionar bélico de las Fuerzas Militares. Siendo este un suceso con múltiples aristas, actores, repercusiones, entre otras particularidades a analizar para, en la medida de lo posible, no repetirlo y obtener nociones que ayuden no solo a resolver la pregunta de investigación, sino también a aportar al cuerpo de conocimiento sobre las Fuerzas Militares y sus integrantes en Colombia.

Este capítulo pretende exponer el caso de estudio, la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE), bajo el lente teórico propuesto líneas atrás, para establecer y analizar la evolución del concepto de guerra. Para tal fin, se examinarán y compararán las editoriales de

la revista *Fuerzas Armadas* publicada por la ESDEGUE desde 1960 hasta la fecha y con más de 200 ediciones. Si bien sería muy extenso y dispendioso el análisis total de las editoriales de cada edición, la presente investigación seleccionó un total de 17 editoriales bajo tres criterios.

El primer criterio corresponde a la selección de una edición de un año del periodo a analizar, es decir una para el año 1998, una para el año 1999 y así sucesivamente hasta llegar a la publicación del año 2014. El segundo criterio se relaciona con el escritor de dicha editorial, pues está es escrita por el personal militar a cargo de la dirección de la ESDEGUE y/o figuras políticas destacadas como presidentes de turno o ministros de defensa. El tercer criterio obedece a seleccionar una de las cuatro ediciones que se realizan por año de la revista, guardando cercanía en el mes de publicación para mantener la distancia temporal entre las ediciones (las editoriales seleccionadas corresponden a los meses de marzo y abril). Sin más preámbulo, a continuación se presentará la historia de la Escuela Superior de Guerra, se analizarán las editoriales seleccionadas por periodo presidencial y, posteriormente, se compararán entre sí. Es pertinente aclarar que las editoriales en la forma de informar cumplen la función de dar una línea de interpretación a los lectores y a la vez mostrar la posición (ideológica) del medio frente a un determinado tema (Van Dijk, 1990).

Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto, unión, proyección y liderazgo

La Escuela Superior de Guerra es una “institución militar de educación superior (posgrados), que capacita a los oficiales superiores de las Fuerzas Militares de Colombia, con el propósito de conducir la guerra, consolidar la paz y contribuir al desarrollo del País” (Escuela Superior de Guerra, 2017). De igual manera brinda capacitación al personal civil que desee vincularse dentro del proceso educativo allí ofrecido (Maestría en Seguridad y Defensa Nacional o Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados), con lo cual, las Fuerzas Armadas (FF.AA) han buscado forjar, mantener y

fortalecer la relación entre personal militar y civiles, promoviendo la preocupación por la seguridad de la nación.

Las acciones de formación de la ESDEGUE, se enmarcan en elementos exógenos, incluyendo regulaciones en el derecho internacional (regulación de los conflictos armados provenientes de la ONU, del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Conflictos Armados, entre otros) y elementos endógenos (la existencia de un conflicto armado, narcotráfico, bandas criminales, entre otros) en los que Colombia y a las FF.MM. se ven inmersos. Es por esto que ha tenido lugar un constante proceso por adaptar las condiciones de las FF.MM para que puedan responder de forma acertada y actualizada a las coyunturas del país, y a las necesidades de responder al conflicto armado.

Uno de los procesos más recientes de transformación de las FF.AA, es el comprendido entre 1998 a 2014, denominado como la transformación militar (cambios tecnológicos, institucionales y doctrinales) de las Fuerzas Armadas (Fundación Seguridad y Democracia, 2003). Dentro de esta transformación se enmarca la educación militar, que por sus características de formación profesional única y especializada, se ha materializado en un sistema con ciertos valores, ethos, ideas y representaciones con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes en quienes integran las Fuerzas Armadas, que permita y avale el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada constitucionalmente y garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, así como el fortalecimiento de la democracia (Gantiva, 2009), con lo cual se han generado espacios para el fortalecimiento, no solo de esta educación superior militar especializada, sino también de las relaciones entre la población civil y militar como el caso de los cursos de posgrado de la ESDEGUE.

Para poner en contexto al lector sobre el devenir histórico de la ESDEGUE es pertinente mencionar algunos aspectos de su historia, principios, valores y lema institucional

con el objetivo de introducir la institución que hace parte del caso de estudio en la presente investigación. La Escuela tuvo su origen en el presidente y general militar Rafael Reyes Prieto en 1909 y su papel fue trascendental como pilar fundamental en la reforma militar de la época (Escuela Superior de Guerra, 2017). Desde aquí se caracterizó a la ESDEGUE como centro de pensamiento estratégico militar, para profesionalizar al personal militar, preparándolo para la conducción de la guerra de ser necesario y el establecimiento de la paz necesariamente. El primer encargado de dicha labor fue el mayor del ejército chileno Pedro Charpin Rival (en 1909) y el primer colombiano, sucesor de este mayor, fue el coronel Alejandro Posada (1912).

En tanto a la historia reciente de la institución, pues cuenta con más de un siglo de trayectoria, se destaca el hecho que en el año 2011 la Escuela “logra la recertificación de todos sus procesos, en las normas ISO 9001 y NTC GP 1000. Ratificación a la formulada bajo los mismos parámetros, en el año 2008 y gracias a la cual se puede asegurar que este Instituto de Estudios Superiores Militares se consolida como el de más alto nivel en el país y un modelo a seguir en el continente” (Escuela Superior de Guerra, 2017. Esto deja clara la firme convicción de ser una institución académica con altos estándares de calidad para la construcción y divulgación de una cultura de seguridad y defensa nacional.

Bajo esta consigna la Escuela enmarca sus principios como verdades inmutables en concordancia a lo establecido por el Comando General de las Fuerzas Militares y que los orientan en el cumplimiento de la Política de Seguridad Democrática (Escuela Superior de Guerra, 2017). Partiendo de los principios generales dictados por el Comando General de las Fuerzas Militares que son: el acatamiento integral de la constitución y las leyes, la total convicción por el respeto a la persona humana, la búsqueda de cooperación e integración interinstitucional, la transparencia y efectividad en todos sus actos, la unión y cambio, la ESDEGUE se maneja bajo el sistema de autonomía académica, el desarrollo personal, trabajo

en equipo, conciencia, flexibilidad y la internacionalización de la educación militar superior. Lo que permite inferir que la ESDEGUE acoge como principios unos preceptos que le permiten una fácil adaptación a los cambios que se insertan cada vez que se presenta un nuevo gobierno y un cambio en la política de seguridad y defensa nacional.

Es por lo anterior que la ESDEGUE se proyecta como “el más prestigioso centro de educación superior militar con carácter de Institución Universitaria, forjador de líderes integrales y generador de pensamiento estratégico, con capital humano competente y programas acreditados de calidad en Seguridad y Defensa Nacionales” (Escuela Superior de Guerra, 2017). Desde esta perspectiva se pone a conocimiento público que la Escuela busca un ejercicio constante de profesionalización militar y reconocimiento civil del quehacer de los profesionales en las armas gracias a un sentido de grupo, una identidad y sistema de valores internos (una suerte de experticia, responsabilidad y corporatividad) (Janowitz, 1960).

Por último, es pertinente retomar el lema institucional de la ESDEGUE como el esfuerzo ligado a la imagen propia y a reafirmar su filosofía. El primero que es la unión, es el propender por incrementar y consolidar la integración de la institución militar y fortalecer los lazos con la población civil; el segundo o la proyección, se centra en la academia como factor que permite ampliar la visión de los estudiantes para comprender procesos nacionales e internacionales; el tercero es el liderazgo, siendo la formación de líderes con idoneidad en el campo militar. Esto supone, desde la perspectiva de Janowitz, un esfuerzo interno por generar actividades militares que influyeran en la legislación y administración de seguridad nacional, a nivel externo el responsabilizarse por el accionar militar (Janowitz, 1960).

Andrés Pastrana (1998-2002), cambio para construir la paz

Para este periodo presidencial se seleccionaron las siguientes ediciones: número 168 de marzo de 1998, número 170 de marzo de 1999, número 174 de marzo de 2000, número

178 de marzo de 2001. Así pues, estas ediciones fueron publicadas durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana bajo la consigna del Plan Nacional de Desarrollo “*Cambio para la Paz*”. En términos de política y énfasis militar se destaca el objetivo central, propuesto en la ley 508 de 1999 (Ley 508, 1999) que avala dicho plan de desarrollo nacional que es:

El de contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana con base en una paz justa y duradera. Con lo cual se pretende fortalecer el estamento militar y de policía, con el fin de reafirmar el pleno ejercicio de la autoridad y el imperio de la ley y afianzar la legitimidad del Estado. Asimismo, se busca consolidar un sistema de convivencia ciudadana y seguridad pública, de manera tal que se pueda actuar sobre el crimen en forma eficaz.

Para alcanzar dicho propósito se pretende aumentar la efectividad de las operaciones de la Fuerza Pública, neutralizar la capacidad de los grupos al margen de la ley y mantener una capacidad disuasiva frente a amenazas externas. Es decir, que se busca una modernización y mayor profesionalización de las Fuerzas Militares para hacer frente a las acciones de los grupos al margen de la ley y mitigar su despliegue en el territorio.

En la “*Nota de presentación de la estrategia general de las Fuerzas Militares de Colombia*”, que es la editorial perteneciente a la edición 166 de marzo de 1998, se encuentra lo que se sugiere desde su título. Así pues, se parte de la noción en la que el conflicto interno no es una guerra convencional entre estados, es una confrontación entre grupos ilegales en contra del Estado (Anexo 1.1). Por ello se propone atacar a los entes generadores de violencia, pues estos son los que representan una amenaza para la sociedad. De este modo, es el Estado quien debe proponer mecanismos para coadyuvar a solucionar problemas sociales, políticos y económicos (corrupción, pobreza, atraso social, incapacidad estatal) e involucrar a la sociedad civil para ello.

Como objetivo final de la estrategia militar se define: la seguridad para la población y sus recursos. Una ofensiva constante contra agentes generadores de violencia con ayuda y colaboración de la población, logrando que el poder militar sea un frente unido para sentar a negociar dichos agentes. Así pues aparece la ESDEGUE como la más alta institución

educativa castrense (bajo las premisas de la lealtad y la democracia), emisor de soluciones alcanzables, cuna y asiento de poderosa mística y esperanza. Su misión es capacitar permanentemente, y de acuerdo con las necesidades institucionales, a los oficiales superiores de las FF.MM, para su desempeño en funciones de comando y estado mayor.

Se exalta que los intereses profesionales están estrechamente relacionados con los intereses institucionales. Es decir, que el militar, por medio de su formación institucional interioriza y reproduce la doctrina militar que le es enseñada para ser participe en el conflicto (lucha fratricida) como los portadores de nuevas y mejores esperanzas (Anexo 1.1). Exaltando al curso de estado mayor como la esencia de la ESDEGUE, pues modernizan la táctica, la estrategia y los fundamentos que rigen los quehaceres militares, dando preeminencia al combate de las ideas sobre las confrontaciones armadas. Finalmente, se concluye con una reflexión sobre el papel central de Fuerza Pública en el conflicto, la cual es incomprendida por amigos y atacada por el enemigo.

Para marzo de 1999 y bajo el título de *Una estrategia general de cara al siglo XXI* se da inicio a la editorial que hace referencia al tema que nos ocupa. En dicha editorial se resalta la firme intención de reorganizar, reestructurar y reformar las instituciones del Estado y en especial las Fuerzas Militares, por el fin del milenio. Por ello, se propone fortalecer la institución (lograr legitimidad y apoyo de la opinión pública y la población civil), desarrollar la cultura institucional y el personal mismo, una suerte de amor propio hacia la institución y a aquellos que forman parte de esta (Anexo 1.2). Finalmente la creación de una conciencia colectiva positiva sobre el quehacer de la milicia por el bien de la nación, retomando el planteamiento de Clausewitz sobre los conflictos en que la guerra es un cambio de actitud, no de hechos (Anexo 1.2; pág 9).

La preocupación por el futuro de la nación es el tema central en la editorial de marzo de 2004 bajo la consigna de pasar revista al año 2000, una *Directiva transitoria* como se

titula, está en acogerse en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La profesionalización de las Fuerzas Militares y el reconocimiento como poseedores de instituciones académicas permitirán una reestructuración y modernización de las Fuerzas gracias a la educación militar. Destacando al militar como líder integral en su formación ética y humanística, de alta sensibilidad social, analítica y reflexiva (Anexo 1.3). El fin último del quehacer militar es alcanzar una convivencia con justicia y paz para toda la nación.

En 2001 Bajo el nombre de *Justicia Militar* en el año 2001 se expone que la política constituye el poder determinante de la guerra (cuándo y con qué propósito se emplea la fuerza). De igual forma se hace énfasis en la diferencia entre un conflicto tradicional (confrontación entre estados) y el irregular (confrontación al interior de un Estado) radica en la naturaleza misma del desarrollo del conflicto, pues en el primero hay una simetría entre fuerzas (confrontación militar con personal preparado para la guerra) y en el segundo hay una relación asimétrica (un grupo tiene superioridad militar sobre otro) (Anexo 1.4).

Se comenta que en el conflicto irregular colombiano hay una suerte de guerra política, hay una confrontación armada que obedece a un trasfondo político. Por tanto, no solo se puede dar una respuesta militar al conflicto, en tanto que se ha dado un menosprecio a la guerrilla y su poder bélico pues cuentan con los medios y el personal para combatir, casi de forma simétrica, a las Fuerzas Militares (Anexo 1.4). El gobierno debe buscar otras alternativas para la resolución de la disputa interna, una paz negociada desde una ventajosa posición de poder y no de debilidad (aislamiento del enemigo, su destrucción y consolidación de la paz), ya que la finalidad de la guerra es la paz. Alcanzar este objetivo solo es posible si hay un verdadero poder nacional, compuesto por la triada Gobierno-Pueblo-Ejército y qué tan cercana es la relación entre sus componentes.

Tras el recorrido por las editoriales en este periodo de tiempo se pueden destacar tres aspectos que guían el grueso del contenido. El primero es la presencia de un doble discurso

sobre el proceder del gobierno en el conflicto armado, otorgando una salida negociada y, al mismo tiempo, la confrontación total. El segundo promueve la modernización del Ejército para combatir y superar al enemigo, mientras que el tercero es la presentación de la triada Gobierno-Pueblo-Ejército (de Clausewitz) como clave para finalizar el conflicto.

En lo que respecta al doble discurso del gobierno se expone la forma en que se le hará frente al conflicto armado. Por lo cual hay una postura que abre la posibilidad a las negociaciones como factor determinante para finalizar la guerra interna, así cualquier grupo que quiera desmovilizarse tendrá como aliado al Estado para el trámite de la paz. Sin embargo, al mismo tiempo que se abre la puerta a las negociaciones, el gobierno es claro al declarar el pie de guerra a todo aquel grupo ilegal que sea un agente de violencia, ya que la directriz militar es la confrontación total.

Al ostentar unos lineamientos militares ofensivos y de confrontación total con los agentes generadores de violencia se debe propender por una simetría de las fuerzas o una superioridad a la del enemigo (Anexo 1.4). De este modo, el gobierno busca la modernización de las Fuerzas Militares con la obtención de equipos de última tecnología (aeronaves, armamento, comunicaciones, entre otros) y una mejor y mayor preparación del personal de las Fuerzas, por lo cual se exhorta a la profesionalización de los integrantes, el mejoramiento de las estrategias y tácticas de combate y a la comprensión misma del enemigo (Anexo 1.3). Todo esto con el fin de superarlo militarmente, obteniendo la capacidad de doblegarlo en batalla.

Finalmente se expone la triada Gobierno-Pueblo-Ejército como la clave para finalizar el conflicto. Los dos puntos anteriores dan luces sobre la interpretación de esta triada en el contexto del conflicto armado, ya que es la interacción y reconocimiento de las partes, lo que posibilita un frente unido para combatir a los agentes generadores de violencia. El gobierno será garante de posibilitar salud, educación, infraestructura y orden judicial para la población;

el Ejército más allá de ser el brazo armado del gobierno, debe asegurar el territorio y la presencia permanente de la institucionalidad del Estado (Anexo 1.2); por último, el pueblo apoyará a las otras dos partes al reconocerlas como legítimas (Anexo 1.1). La relación entre los tres componentes mitigará a los agentes de violencia y evitará su reaparición en Colombia, pues la estabilidad de las partes garantiza la paz y el poder nacional.

Álvaro Uribe (2002-2006), hacia un estado comunitario

Para este periodo presidencial se seleccionaron las ediciones 182 de abril de 2002, 186 de abril de 2003, 190 de marzo de 2004, 194 de marzo de 2005. Estas ediciones fueron publicadas durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe bajo el orden del Plan Nacional de Desarrollo “*Hacia un Estado comunitario*” (Ley 812, 2003). En cuanto al énfasis militar y política de seguridad y defensa se expone en que:

El Gobierno Nacional implementará un modelo que le permita al Estado retomar el control definitivo en aquellas zonas con influencia de los grupos armados ilegales y lograr su accionar legítimo en todo el territorio nacional. Se trata de un esfuerzo integral, conjunto y coordinado de recuperación, presencia y consolidación interinstitucional. Este modelo persigue mediante la acción de las Fuerzas Militares, una recuperación gradual de las zonas afectadas por la violencia.

Lo cual supone una franca ofensiva militar contra los grupos al margen de la ley, a fin de recuperar el control territorial a nivel local y regional. Esto con el compromiso de instaurar toda la institucionalidad del Estado una vez se haya asegurado la zona, logrando la llegada de la Seguridad Democrática.

Ahora bien, es necesario recordar el propósito de la “*Revista Fuerzas Armadas*” que es el de llenar el vacío entre pensamiento militar y estratégico, acercar a la ciudadanía a su doctrina y labor constitucional, generando un pensamiento favorable sobre la milicia (Anexo 1.5). Desde este punto de vista, se prepara a los alumnos de la ESDEGUE para analizar y reflexionar, siendo referentes que confronten sus tesis (conocimiento adquirido) en medio del conflicto y hagan aportes a la realidad actual del país. Esto se debe, según los editorialistas de

la revista, a la crisis política que atraviesa la nación y a la necesidad de ideas y de orientación para superar las dificultades ocasionadas por los grupos al margen de la ley.

De igual forma, existe una voluntad de negociación de paz, expresada en la edición de 2002 bajo el subtítulo de *El papel de las Fuerzas Militares y el futuro de la paz en Colombia*, en medio de la guerra las Fuerzas Militares obedecen y están subordinadas al poder civil, mientras continua la guerra deben garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional con las armas. Aunque se destaca la oposición a la zona de despeje, pues aquí se fortalecen las FARC, y se aboga por la pronta reforma de FF.MM (fortalecer y modernizar) como parte de la política para la paz y recuperación de la seguridad pública, el actuar militar está dentro de los lineamientos de los Derechos Humanos, con el uso legítimo de la fuerza para evitar la degradación del conflicto, debido a la guerra revolucionaria, prolongada en el tiempo, y de origen marxista, resaltando el uso intensivo del terrorismo debido a una inferioridad de poder respecto a las FF.MM (Anexo 1.5).

En este periodo se da un cambio en la confrontación Estado-Guerrilla, se presenta un repliegue guerrillero por aumento de poder en FF.MM y la aparición del terrorismo como estrategia predilecta de la guerrilla. Con este panorama se identifican las ventajas de la guerrilla, las cuales son, sorpresa: clandestinas y con objetivos pequeños, ofensiva: dispersión de fuerza en un mismo territorio, unidad de mando: actuación en bloque, sencillez: adaptados al medio. Y también se identifican las ventajas del Estado como masa, supremacía en transporte y movilización de personal; economía de las fuerzas, adecuada dosificación de medios y recursos.

El Comando General de las Fuerzas Militares expone, por medio de la edición 86 de 2003, que el campo de la defensa y seguridad nacional es un ámbito multidimensional y que los conceptos anteriores de guerra, no permiten una respuesta decisiva y adecuada a los retos del mundo contemporáneo (Anexo 1.6). Existe un campo de combate moderno (aire, tierra y

mar) que opera bajo la conducción de comandos conjuntos, dedicados al logro de objetivos militares, con el fin de establecer las demandas dictadas por la comunidad política. De igual forma se afirma que el empleo de ataques aéreos, por si solos, no asegura la victoria total sobre el enemigo y es necesaria una intervención militar y política directa en el territorio (Anexo 1.6).

Es importante resaltar la vigencia de las FF.MM, como se presenta en el saludo del General Carlos Ospina en 2004 por medio de la edición 190, en la cual se pretende hacer memoria y resaltar el compromiso histórico de éstas con sus deberes patrios y con la defensa de las libertades y derechos ciudadanos. Por tanto, se debe enfrentar y contener la amenaza terrorista en la nación, ya que las Fuerzas Militares en su actuar bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Conflictos Armados, con tal de proteger al pueblo y vencer a los bandidos. La decisión férrea del Estado es la de combatir, siendo el 2004 el año de la consolidación del debilitamiento definitivo del enemigo (no tienen apoyo del pueblo o la comunidad internacional) (Anexo 1.7). Esto permite dar contenido a una nueva concepción de la guerra, en la cual el militar es un líder integro que logra el control territorial y lucha contra el narcotráfico, que es la fortaleza económica y logística del enemigo, cuya misión es ganar la guerra, transformando el conflicto por medio del sometimiento de la voluntad de lucha del enemigo, gracias a la derrota militar.

Lo anterior se mantiene y se remarca el compromiso de las FF.AA, como lo muestra el saludo del General Carlos Quiroga en el saludo de la edición 194 de 2005: proteger al pueblo colombiano de acciones violentas provocadas por las organizaciones al margen de la ley, siendo esto posible por la formación militar de su personal. Se afirma entonces que la preparación militar debe ser más pensada y analizada, por ello las mejoras humanas (educación) son condiciones indispensables y estratégicas para ganar la guerra (Anexo 1.8). Por lo tanto, los integrantes de las FF.MM deben estudiar el desarrollo de la guerra y al

enemigo, contando con una doctrina unificada y entendida por todos los miembros de las fuerzas, para imponerse sobre el contrincante.

Con esto se plantea que las guerras se ganan primeramente en la mente (pensamiento de los hombres) y la ESDEGUE posee un rol central para la victoria. Es de este modo que se busca fortalecer los conocimientos de los alumnos en el arte de la guerra, comprensión política, dominio de la estrategia, táctica y logística, no solo para contar con las mejores cualidades en el quehacer militar, sino también para asegurar un relevo generacional para dirigir las fuerzas (formar oficiales superiores para que estén preparados si deben asumir el cargo de generales) (Anexo 1.8). Todo esto es posible gracias a la preparación que brinda la ESDEGUE a sus estudiantes en ámbitos como seguridad de los conciudadanos, integridad del territorio y vigencia de la institucionalidad legítimamente constituida.

Otro aspecto resaltado es el de la reforma militar que ha encajado perfectamente con la política de Seguridad Democrática, respaldando una voluntad política a nivel estratégico para el desarrollo del conflicto. Esto ha traído consigo un mejoramiento a nivel económico que es el reflejo del mejoramiento y ventaja en el conflicto, otorgando la retoma de territorio y la presencia del Estado. El Plan de guerra Patriota es la guía militar para la ofensiva directa contra las guerrillas, procurando la retoma del control territorial y un accionar militar bajo el marco del cumplimiento y fortalecimiento de la cultura de DD.HH y DIH que legitime a las Fuerzas Militares (Anexo 1.8).

Al mostrar lo más destacado de las editoriales que tuvieron lugar en este periodo presidencial, se encuentran cuatro puntos que son centrales y transversales en la proyección de la política de gobierno y la línea militar a seguir. El primero, corresponde a la ruptura definitiva de las negociaciones con las FARC; el segundo, con la modernización del Ejército; el tercero, a una superioridad militar y el cuarto, a la instauración de la Seguridad Democrática.

En cuanto a la ruptura de las negociaciones con las FARC, se atribuye a la postura del gobierno de turno, el desarrollo militar y la desconfianza del gobierno a causa del accionar de dicha guerrilla. La postura de gobierno es el realizar una ofensiva total para recuperar soberanía en el territorio y brindar seguridad a la población civil (Anexo 1.8 y 1.7). Este planteamiento del gobierno obedece a la sospecha del fortalecimiento guerrillero en medio de las negociaciones de paz, siendo esto una cortina para reagruparse y robustecer sus filas y armamentos. Razón por la cual, desde el Estado, se busca la forma y los medios para potencializar a las Fuerzas Militares.

Una vez el gobierno instaura como primordial la modernización del Ejército para obtener la victoria y establecer la paz en el país, la ESDEGUE tiene un papel preponderante en la formación de los profesionales de las armas. No solo en cuanto a aspectos de equipamiento y armamento se enfoca la modernización, sino también en el desarrollo táctico, estratégico y profesional del personal militar. Estos aspectos son en los que se enfoca la ESDEGUE al preparar a los alumnos para analizar y reflexionar sobre la guerra y su enemigo, para realizar aportes a la realidad actual de país.

Es tras lo anterior que se llega al tercer punto: la consolidación de la superioridad militar de las Fuerzas Militares respecto a la guerrilla. Entonces el ejército logra su compromiso histórico con sus deberes patrios y con la defensa de las libertades y derechos ciudadanos al replegar, reducir y repeler a las FARC. Esta superioridad es dada por la modernización de equipamientos, armamentos y profesionalización (capacitación en DD.HH, DICA y el desarrollo de la guerra) del personal militar.

Los tres aspectos anteriores son la base fundamental para la implementación y éxito del plan de gobierno que enmarca la Seguridad Democrática. Así pues es el cambio de un discurso de hacer la guerra y negociar la paz al tiempo, cambia por una confrontación militar total para recuperar el territorio y neutralizar la amenaza terrorista (Anexo 1.8). De la mano de

la modernización del Ejército se da una superioridad militar por parte de las Fuerzas Armadas, reduciendo al enemigo y permitiendo al Estado la ventaja frente a la guerrilla. Con todo esto, el accionar militar, se enmarca en la búsqueda de legitimidad de las Fuerzas Militares tanto por sus resultados, como por desempeñarse conforme al DICA y los DD.HH.

Álvaro Uribe (2006-2010), estado comunitario: desarrollo para todos

Para este segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe se seleccionaron las ediciones 198 de marzo de 2006, 201 de marzo de 2007, 205 de abril de 2008, 209 y 210 de marzo y junio de 2009. Dichas editoriales fueron publicadas a la luz del Plan Nacional de Desarrollo “*Estado comunitario: desarrollo para todos*” (Ley 1151, 2007). En lo que respecta al componente militar y de política de seguridad y defensa se enfatiza en que:

El Gobierno Nacional considera como un asunto de importancia estratégica la consolidación de la Política de Seguridad Democrática en aras de completar el proceso de recuperación del control del territorio. En este sentido, se espera continuar avanzando en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la inteligencia de Estado, como herramientas preventivas y ofensivas frente al accionar de los Grupos Armados al Margen de la Ley. La consecución de una situación de normalidad y seguridad requerirá de una acción decidida en contra de aquellos fenómenos que perjudiquen el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. De esta manera, se continuará con la lucha frontal contra el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro y, en general, toda forma de crimen organizado

Así pues, se pretende dar continuidad a la política de Seguridad Democrática instaurada en el periodo anterior y consolidar, de manera total la seguridad del territorio. Para cumplir con esto, la ofensiva militar continuará siendo total y directa contra los grupos armados al margen de la ley, buscando recuperar el territorio y posterior implementación de instituciones estatales para generar gobernabilidad y legitimidad por parte del Estado frente a la población civil.

Como se mencionó líneas atrás la Seguridad Democrática, como expresa el General Enrique Corre en la edición 198 de 2006, representa la voluntad política para recuperar las condiciones ideales de seguridad en Colombia (Anexo 1.9). Para lograr dicho objetivo es necesario realizar una acción integral que fortalezca la gobernabilidad, la justicia, el control

territorial y permita la presencia permanente del Estado en el territorio. En tal sentido, para los editorialistas de la revista Fuerzas Armadas, la ESDEGUE es el esfuerzo académico para difundir la política de Seguridad Democrática por medio de los oficiales de las FF.MM. De este modo el triángulo de poder propuesto por Clausewitz (Pueblo-Gobierno-Ejército) estará en sincronía (Anexo 1.9).

De forma similar en 2007 se hace palpable la carencia estatal en el territorio colombiano, por lo cual el esfuerzo militar está enfocado por garantizar la seguridad civil, lograr la victoria final y posterior llegada del Estado al grueso de las regiones del país. El Plan de guerra Consolidación guiará a los profesionales de las armas en dicha tarea, a saber: la consolidación de la Seguridad Democrática en todo el territorio nacional (Anexo 1.10). De igual forma serán respaldados, los militares, con la implementación de una política de acción integral, el apoyo popular y legitimidad de su actuar. Para finalmente posicionar a las FF.MM como legítimas, modernas, efectivas, transparentes y victoriosas en Colombia, como afirma el General Freddy Padilla (Anexo 1.10).

La Seguridad Democrática debe ser entendida como la esperanza de un futuro en paz con justicia social, confianza inversionista y desarrollo sostenible, como se muestra en 2008 de la mano del General Freddy Padilla (Anexo 1.11). La consolidación territorial, el mejoramiento de la seguridad urbana y la política integral de derechos humanos (tras el primer periodo para recuperar el control territorial) permitirán ese futuro en paz. De este modo, las Fuerzas Armadas serán las encargadas de mantener el control territorial y fortalecer el Estado de derecho en el territorio. Esto solo será posible en la medida en que se cuente con una Fuerza Pública basada en el respeto a los DD.HH y el DIH, legítima, moderna y eficaz con confianza y apoyo de la población (Anexo 1.11).

Para el año 2009 se conmemora la fundación de la ESDEGUE como el sueño iniciado en 1909 del general Rafael Reyes Prieto de profesionalizar a los miembros de las

FF.MM. La ESDEGUE es entonces el pilar orientador de la Seguridad Democrática y máximo exponente en la formación académica militar, como registra el presidente Álvaro Uribe (Anexo 1.12). Sin embargo, para restablecer la seguridad en Colombia que requieren a todos los ciudadanos y el papel de las FF.MM es el de cumplir la misión constitucional al enfrentar al terrorismo (principal causante de la pobreza).

Durante este periodo de tiempo (2006-2010) las editoriales comparten la referencia de una consolidación del planteamiento del gobierno de la Seguridad Democrática, pues al ser el segundo mandato consecutivo del presidente Uribe se busca dar continuidad a sus políticas. Por ello, a lo largo de las editoriales hay cinco puntos que, de forma explícita en algunas editoriales y en otras de manera implícita, son reiterativos y claves para lograr dicha consolidación.

El primero se centra en el cumplimiento de la misión constitucional del Ejército, como se expresa en el artículo 217 de la Constitución Política de 1991: “las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional”. Esto dentro de lo estipulado por estándares internacionales consagrados en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Conflictos Armados, dotando a los integrantes de las Fuerzas la mejor preparación para el ejercicio de su profesión (Anexo 1.9).

Esto está directamente relacionado con el segundo aspecto transversal a las editoriales y es el fortalecimiento de la seguridad territorial para la posterior llegada del Estado (Anexo 1.11). Esto se refiere a la toma o retoma del territorio a lo largo del País, por medio de la acción de las Fuerzas Militares, para una posterior llegada de la institucionalidad estatal (salud, educación, orden jurídico, infraestructura), logrando así la legitimación del Estado y las Fuerzas Militares en su accionar en el conflicto y posibilitando gobernabilidad a nivel local y regional en el grueso de la nación.

Al consolidarse los dos aspectos anteriores, el gobierno y las Fuerzas Militares, según las editoriales analizadas, subrayan la imposibilidad de obtener una victoria militar del conflicto para alcanzar la paz (Anexo 1.12). Por tanto, se estipula la necesidad de buscar alternativas distintas a la confrontación total, pese a la superioridad militar de las FF.AA y la reducción significativa del enemigo. De esta manera, se aumenta la probabilidad de negociar con las FARC, contando con una posición ventajosa en aspectos militares y apoyo civil.

El cuarto aspecto a tratar en el grueso de las editoriales es el papel fundamental de la ESDEGUE al ser la máxima institución castrense. Al ser un centro de formación académico y militar, se presenta como el espacio idóneo para promover la consolidación de la Seguridad Democrática, siendo el puente entre militares y civiles (Anexo 1.10). Esto se logra por medio de la profesionalización del personal militar (y civil) con miras a solucionar el conflicto, más allá de desarrollar la guerra y fortaleciendo la gobernabilidad del Estado en todo el territorio.

Los cuatro aspectos transversales apuntan a la consolidación del quinto punto, puesto que este supone la triada propuesta por Clausewitz (Pueblo-Gobierno-Ejército) como eje central de afianzamiento de la Seguridad Democrática. El gobierno en este caso es quien dictamina la política y busca llegar al pueblo para garantizar unos mínimos para el goce y disfrute del territorio; el Ejército es el encargado de retomar el territorio e instaurar un contexto seguro para que el Estado llegue al territorio; finalmente el pueblo, es el encargado de legitimar el accionar militar y reconocer la injerencia del Estado en el territorio. Así las cosas, se supone una interrelación en la triada que sustente la consolidación de la Seguridad Democrática y posterior consecución de la paz.

Juan Manuel Santos (2010-2014), prosperidad para todos

En este último periodo presidencial a estudiar se seleccionaron las ediciones 213 de marzo de 2010, 217 de marzo de 2011, 221 de marzo de 2012, 225 de marzo de 2013 y 229

de marzo de 2014. Estas ediciones fueron publicadas durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos y guardan una estrecha relación con el Plan Nacional de Desarrollo “*Prosperidad para todos*” (Ley 1450, 2011). En cuanto al papel militar y la política de seguridad y defensa se expone en el resumen ejecutivo (2011) que:

La prosperidad para todos, principio fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, solo se alcanza garantizando la prevalencia del Estado de Derecho en todo el territorio. Lo anterior implica consolidar la seguridad, garantizar la observancia plena de los derechos humanos, y proveer un sistema de justicia pronto y eficaz. [...] Ahora bien, los esfuerzos en la lucha contra la violencia no se limitan al enfrentamiento contra los agentes al margen de la Ley y su posterior sometimiento a la justicia. Estos esfuerzos se enmarcan en un concepto más amplio que abarca también la búsqueda de pilares básicos de la justicia transicional como la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

Acá se aprecia cómo se aboga por el mantenimiento de la soberanía territorial, de ser necesaria con la confrontación militar, para establecer el control del Estado. De esta forma se introduce no solo la superioridad militar, sino un discurso que busca dar solución al conflicto armado por vías alternas a la confrontación de armas.

De la mano del presidente Alvar Uribe y el General Freddy Padilla, para el 2010, se señala la necesaria construcción de una cultura de seguridad y defensa nacional en Colombia. Para ello, se debe entender que la Fuerza Pública está llamada a salvaguardar al frágil y el único actor que tiene y puede ejercer el monopolio de la fuerza, el Estado (Anexo 1.13). Este es el encargado de la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden jurídico (protección del ser humano). Suponiendo así que el único camino de la patria es el de las Fuerzas Armadas.

Es tiempo de pacificar a la sociedad y contribuir a la construcción de un Estado fuerte, por medio del progreso y el fortalecimiento militar (modernización y profesionalización) (Anexo 1.14). Es menester del Estado y su brazo armado, la contención de amenazas por medio de una actitud ofensiva que reduzca los factores de violencia. Se sigue la línea estratégica de ganar la guerra y obtener la paz subsiguiente o esto es lo que reposa en la editorial de 2011, *Seguridad y estrategia: los desafíos del futuro*.

La *Vocación militar*, tema central de la edición de marzo de 2012, es motivada por Dios, la patria y la familia (Anexo 1.15). Esta es una profesión basada permanentemente por la actitud y desinterés de servicio, la vida de quien la ejerce está supeditada al sacrificio propio por el otro colombiano y por la patria. Por ello es necesario orientar el pensamiento militar colombiano hacia la construcción del futuro de la patria (Anexo 1.16). La educación militar tiene la obligación de preparar profesionales en las armas capaces de construir y mantener la paz, como lo consigna el General Javier Fernández en las últimas tres ediciones seleccionadas. En este tiempo la solución política al conflicto es posible y hay una incertidumbre sobre el escenario nacional en que se dé el postconflicto.

En medio del conflicto hay víctimas de distintas procedencias y distintos bandos, por lo cual es legítimo y necesario pensar en las víctimas militares y policiales. También, el papel del Estado debe ser el de garante para la presencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado (Anexo 1.17). De igual forma hay autonomía estatal para definir y dar sentido a la categoría de víctima en concordancia con el Derecho Internacional de los Conflictos Armados y los DD.HH.

Las editoriales correspondientes a este periodo de tiempo resaltan la importancia de continuar con la ofensiva militar directa sobre la guerrilla, entendida esta como factor generador de violencia. Así pues, se insta a la continua modernización y profesionalización de las Fuerzas Militares para obtener la paz en Colombia, pues de este modo se tendrán unas Fuerzas preparadas para hacer la guerra e implementar y mantener la paz.

Se aprecia un notorio cambio discursivo entre los periodos presidenciales de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, pues aunque se posee una superioridad militar respecto a las guerrillas se contempla una salida negociada del conflicto. Esto supone un cambio de pensamiento en las estructuras militares, pasando de un pensamiento guerrillero (la única victoria, frente a las guerrillas, es la militar) a un pensamiento pacificador (la negociación es

más viable como estrategia para poner fin al conflicto). Esto trae dos cambios para las Fuerzas Militares sustanciales, el primero es el papel pacificador que desempeñan y el segundo es la preparación de las mismas para un probable posconflicto.

Por último, se cambia la noción del militar como el profesional que puede hacer la guerra (Anexo 1.13) por aquel que debe construir y mantener la paz (Anexo 1.16). Así pues, se parte de la vocación militar como una vocación de servicio abnegada, pues de ser necesario el militar da su vida por el país y/o los civiles y con ello denota su disposición por trabajar con y por el otro.

Algunas reflexiones y conclusiones

Hasta este punto se ha destacado lo más relevante de cada una de las 17 editoriales seleccionadas, se contrastaron entre sí y, al mismo tiempo, a la luz del Plan Nacional de Desarrollo (con énfasis en la política de seguridad y defensa y/o papel de las Fuerzas Militares) correspondiente a cada ciclo presidencial, dentro del periodo de tiempo seleccionado para investigar (1998 a 2014). Sin embargo, es necesario realizar un análisis transversal y profundizar en algunos aspectos mencionados líneas atrás, para identificar diferencias y similitudes, dando cuenta de cómo ha evolucionado el concepto de guerra en Colombia entre 1998 y 2014, y cómo se reflejan esos conceptos cambiantes en la formación de los militares.

Inicialmente se puede destacar que la postura del gobierno Pastrana se enmarca en la disposición a la negociación con grupos al margen de la ley, mientras se combate a dichos grupos simultáneamente. Para el gobierno de Uribe, se sostiene que la guerrilla no tiene fines políticos y son narcoterroristas, por tanto hay que obtener una victoria militar y no una negociada. El gobierno Santos, por su parte, propone una pacificación del territorio nacional o

lo que es la búsqueda de la paz negociada desde una posición de ventaja militar sobre los grupos generadores de violencia.

El párrafo anterior, es la muestra de la estrecha relación que existe y es persistente entre el planteamiento de gobierno y el discurso militar sobre el desarrollo de la guerra. En palabras de Kaldor (2001) en todas las épocas existe una relación compleja entre los procesos de gobernanza, la legitimidad y las formas de seguridad. Esto no resulta extraño en tanto que, como se planteó en el primer capítulo, la guerra es un hecho social y este no puede considerarse aislado del terreno de la política y el gobierno, pues es aquí donde se avala o no la participación en dicho hecho social. Asimismo, se afirma que la política interna del Estado tiene gran importancia para explicar una postura material de la guerra y su desarrollo.

En cuanto al proceso de gobernanza (cómo se tratan los asuntos humanos) y la legitimidad del Estado en este caso, se aprecia una postura que aboga por recuperar el territorio. Es decir, que uno de los propósitos de la guerra es el control territorial y posterior ejercicio de soberanía en el lugar recuperado, la llegada de la institucionalidad del Estado representado en un primer momento con las Fuerzas Militares y después con la llegada de servicios estatales (seguridad, salud, educación, orden judicial). Como lo afirma Kaldor, el monopolio de la violencia legítima se ha roto y lo fundamental no es la privatización de la violencia sino la crisis de legitimidad (2001), lo que permite asumir que la postura del gobierno al enfrentar a grupos militares ilegales (pérdida del monopolio de la violencia) es la retoma territorial y asegurar la llegada del Estado al grueso de la población (una crisis de legitimidad en tanto el estado es ineficiente en acobijar a toda la población en el territorio en el que es soberano).

Con esta preocupación por la pérdida territorial y de legitimidad, el gobierno insta a las Fuerzas Militares a ser su grupo de avanzada en la recuperación de ambos aspectos (formas de seguridad, cómo se controla la violencia legítima). Iniciar tal gesta, que es una

preocupación central en todos los periodos presidenciales entre 1998 al 2014, supone un ejercicio de modernización y profesionalización de las Fuerzas Militares para hacer la guerra y garantizar su superioridad respecto a su adversario, desde esta perspectiva se enmarcan tres reflexiones respecto a la transformación militar. Primero, se destaca la inversión económica para modernizar los implementos empleados por las FF.AA, como un inicio del fortalecimiento defensivo y ofensivo contra los grupos guerrilleros del país; segundo, se resalta el esfuerzo por profesionalizar a los militares y la implementación de comandos conjuntos para hacer frente a la guerrilla; finalmente, está el cambio en la doctrina para adaptarla a la realidad del conflicto armado, preparando a las FF.AA bajo estándares internacionales (Derechos humanos y Derecho internacional de los conflictos armados) y locales (relaciones civil-militares).

En términos de modernización es la adquisición del equipamiento en armas, aparatos de comunicación, vehículos y todo andamiaje físico propio para mejorar el desempeño individual y en conjunto de los militares. De igual manera a nivel táctico y estratégico, supone la capacitación en parámetros para hacer la guerra según sea el contexto (territorial, social y político) en el cual tenga lugar la confrontación por la supremacía militar o como afirma Janowitz el adoctrinamiento es diseñado para desarrollar capacidades críticas y una orientación crítica (Janowitz, 1960; pág 13). Sin embargo, el punto más destacado y reiterativo se refiere a la profesionalización de las Fuerzas Militares, siendo este el resultado del entrenamiento prolongado, la adquisición de habilidades especiales que le permite al personal militar brindar un servicio especializad (Janowitz; 1960). Es decir que las Fuerzas Armadas estén en la capacidad experta de hacer la guerra y administrar la violencia bajo el halo de legitimidad que les brinda el gobierno.

Con lo visto a lo largo de la investigación, se puede contrastar la visión inicial con la que se partió a la hora de entender la guerra y la noción que se ha apreciado de la misma hasta

este punto. Inicialmente, se entiende la guerra como un fenómeno social, con diversas dimensiones (significado, motivaciones, ejecución, táctica, entre otras), siendo una actividad social y política, para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001). Sin embargo, el devenir histórico del país le ha dado una singularidad a la concepción misma de la guerra gracias a tres puntos notorios. Primero, se destaca que el carácter del conflicto está dado por un proceso histórico que define y redefine a sus participantes constantemente; segundo, estos participantes, en su mayoría, son víctimas que, tiempo después, pueden convertirse en victimarios; finalmente, está el cambio en la doctrina militar para adaptarla a la realidad del conflicto armado, siendo el cambio más significativo el paso de una guerrilla insurgente a un grupo de terroristas, a los cuales hay que vencer militarmente.

Hasta este punto puedo dar una concepción de la guerra, contempla el enfrentamiento entre bandos (dos o más), que forma parte del oficio del militar, está mediada por las pretensiones del Estado e involucra la constante lucha por el control del territorio y la legitimidad del gobierno y las acciones realizadas por las Fuerzas Militares para hacerse con dicho territorio. Es decir que lo central en la guerra interna de Colombia o lo que es la clave de la violencia es la reconstrucción de la legitimidad (Kaldor, 2001; pág 147), independientemente de la variación ilustrada en el capítulo anterior y el presente. Se pasó de combatir o reprimir la oposición al gobierno a una confrontación armada entre el Estado y guerrillas con fines políticos (guerra de guerrillas), luego se redefinieron los actores del conflicto y se dio un enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y los grupos narcoterroristas (guerra contra el narcotráfico y luego guerra contra el terrorismo). Finalmente, se posiciona una confrontación total (con una superioridad militar) en la que se asegura que pese a la visión de unas FF.MM que no buscan la paz, estas si lo hacen, pero deben estar preparadas para combatir, en palabras de Salcedo la disposición de negociar en medio del conflicto exige guante blanco para dialogar y puño de hierro para golpear (Salcedo, 1998; 56).

Esta es una explicación macro desde la posición del Estado y la ESDEGUE como instituciones que regulan e influyen a los individuos, que sigue la línea de construcción de una noción de guerra que puede verse en una corriente de adoctrinamiento, guardadas proporciones, Estado-Fuerzas Militares-ESDEGUE-alumnos. Es decir, que la noción de la guerra esta mediada por una voz oficial que es la del Estado (posición política sobre el quehacer de la guerra, quién o quiénes son el enemigo o enemigos), luego es materializada por las Fuerzas Militares (ejecución del Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación) al enfrentar a los grupos militares ilegales a lo largo de la geografía colombiana, impartida por la ESDEGUE como doctrina en un sistema con ciertos valores, ethos, ideas y representaciones con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes en quienes integran las Fuerzas Armadas (alumnos).

Con lo anterior se destaca a los militares que no solo se forman para hacer la guerra, sino también se forman para la paz, sustentada en otra constante relevante hasta el momento para definir la guerra. La integración, interacción y licitud de la triada Pueblo-Ejército-Gobierno propuesta por Clausewitz es constantemente contemplada para hablar de las relaciones entre los actores del conflicto. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la noción de guerra en Colombia se afilia a los adeptos a una línea de pensamiento neo-Clausewitziano, adicionando ciertas particularidades al análisis de la guerra realizado por Clausewitz, para que este pueda analizar las nuevas formas de confrontación como la guerra de guerrillas y posterior guerra contra el narcoterrorismo.

La Escuela Superior de Guerra una visión de quienes la vivieron

Este es el capítulo final y por ello cuenta con dos aspectos fundamentales. El primero es la continuidad en la indagación del caso (ESDEGUE), bajo el lente teórico propuesto en capítulos anteriores, para establecer y analizar la evolución del concepto de guerra desde aquellas personas que formaron o forman parte de la misma institución, en este caso dos estudiantes civiles graduados, un profesor de la institución y que es civil, un Coronel en retiro que es profesor y fue alumno allí y un Coronel retirado que fue alumno y profesor de la institución (cada uno de ellos se representará con una letra, pues al realizar las entrevistas pidieron mantener en reserva su identidad). El segundo es la conclusión gruesa del estudio proveniente de la recapitulación y los hallazgos tras contrastar la teoría, la realidad y su interacción por medio de las editoriales y las entrevistas analizadas.

Para dar cuenta del pensamiento de quienes formaron o forman parte de la ESDEGUE se realizaron entrevistas semiestructuradas para determinar la forma en que construyen la noción de guerra, de sí mismos como miembros de las FF.MM o como civiles con filiación a estas y, al mismo tiempo, explorar e identificar la forma en que los estudiantes de la ESDEGUE construyen a los “otros” actores del conflicto armado colombiano.

Prepararse para la guerra y para la paz

En este apartado se analiza y menciona lo más destacado de las dos entrevistas realizadas a los Coroneles del Ejército en retiro, de los cuales uno es instructor activo en la ESDEGUE y el otro lo fue durante un periodo mayor a un año. El Coronel R estuvo activo durante más de treinta años y actualmente hace uso de buen retiro, fue instructor temporal en la institución de cursos especializados para personal militar. El Coronel M se desempeña en la actualidad como docente de pensamiento estratégico, teoría de la guerra y prospectiva.

Ahora bien, respecto a la forma en que construyen la noción de guerra va de la mano del desarrollo mismo del conflicto interno. Para ambos Coroneles hay una diferencia abismal entre el concepto de guerra y cómo este opera en la realidad, pues en cuanto a lo teórico se reduce a una serie de lineamientos generales de lo que posiblemente se puede encontrar en el campo de batalla, pasando por tipificaciones (guerra de guerrillas, guerra contra el narcotráfico, guerra entre Estados, entre otras denominaciones), manejo de personal, equipamiento y estrategias de ataque y defensa que deben ser afirmadas, modificadas y /o negadas en el momento de aplicarse en la realidad. Como afirma el Coronel R y de forma similar el Coronel M: La guerra ha ido cambiando porque tiene que adaptarse a la nueva tecnología de la guerra [...] el mayor beneficiado con la guerra fue el ejército porque se tecnificó y avanza y se volvió uno de los ejércitos más poderosos de América latina. La guerra nos hizo fuertes. [...] Nosotros adquirimos más conocimientos, [...] el soldado de ahora es una máquina (R, comunicación personal, 26 de enero de 2017).

La oficialidad hoy en día es una oficialidad más madura, es una oficialidad que ya tiene bases importantes de pensamiento crítico. [...] Tiene sus principios, obviamente muy conservadores, esa es la tradición militar colombiana. Tenemos una oficialidad madura, tenemos buenos comandantes. Yo creo que su educación superior, educación que da la Escuela Superior de Guerra es orientada a eso a la crítica (M, comunicación personal, 26 de diciembre de 2017).

La imagen que poseen de sí mismo también se ve enmarcada en el mismo discurso de la mística militar, su formación y la pertenencia a una institución que otorga un distintivo, tanto en su pensar como en su quehacer, respecto a la población civil. Como afirma R “al militar lo hacen los militares [...] es un ejército fuerte, el más fuerte de Suramérica” (R, comunicación personal, 26 de enero de 2017). Es decir que se le da un status distinto (con

aire de superioridad y nobleza) al profesional de las armas que se capacita para desarrollar la guerra, generar y mantener la paz y, algo que parece surrealista, morir o matar por su Nación.

En cuanto a la construcción de los otros actores del conflicto armado se identifican las guerrillas, los paramilitares y la población civil. Respecto a las guerrillas y los paramilitares se destaca el papel que tuvo o tiene el gobierno para su formación (condiciones sociales de desigualdad y falta de presencia estatal) y para erradicar o mermar estos grupos ilegales, a lo que el coronel R menciona “aprovecharon (las guerrillas) un momento político como este (80’s) [...] una inconformidad y el pueblo no sabía qué hacer” (R, comunicación personal, 26 de enero de 2017) y el coronel M aclara “cómo fue de difícil o ha sido difícil, siempre, luchar contra este tipo de fenómenos (la aparición del narcotráfico y la financiación que dio a paramilitares y guerrillas)” (M, comunicación personal, 26 de diciembre de 2017). La población civil posee dos concepciones, la primera se trata del estar atrapados en medio de las confrontaciones ente los mismos grupos ilegales o de estos contra las FF.MM y, la segunda, el rol de instructores y estudiantes que se acercan a la institución ávidos de conocimiento como destaca M: ver la integración de los civiles en estos aspectos, se civiliza la seguridad y se ponen más manos a la crítica, a la construcción y a la evolución positiva de estos conceptos (M, comunicación personal, 26 de diciembre de 2017).

Una nueva realidad, estudiar en la Escuela Superior de Guerra

En este último apartado se cuenta con la visión de dos estudiantes civiles graduados de la maestría en Seguridad y Defensa que ofrece la ESDEGUE y, de igual forma, de un instructor civil de la institución. Así pues el primer estudiante es S, un historiador de pregrado y en la actualidad se desempeña como asesor en temas de seguridad y convivencia con la policía; el segundo o E, posee título en relaciones internacionales y se emplea en la secretaría

de seguridad de una alcaldía local de Bogotá; el tercero, un instructor J con la cátedra de prospectiva en la ESDEGUE y cuya profesión se desarrolla en el campo de la ingeniería civil. Los tres coinciden en un cambio de pensamiento tras su paso por la institución. Al ingresar manifiestan cierto acercamiento por la vida militar, desde el conocimiento mediático del conflicto interno, que al ser contrastadas con la vivencia educativa y convivencia con profesionales de las armas, cambia de forma positiva y obtiene un sentido de respeto y admiración por los compromisos y desarrollos propios de quienes ejercen dicha profesión. Como lo explica S y J en sus propias palabras: Obviamente uno aprende a entender y conocer todo, incluso el solo lenguaje. El solo lenguaje es fundamental ¿no? La relación de jerarquía se establece a partir del lenguaje, entonces si usted es un subordinado tiene que ser “mi”, “mi coronel”, “mi capitán”, “mi sargento” y es una expresión también de respeto porque incluso hay superiores que le dicen... digamos, tú eres un general y me dice a mí “mi sargento”, es como una manifestación de respeto, no sólo de autoridad (S, comunicación personal, diciembre 2017).

Al entrar a trabajar con ellos [...] los empiezo a conocer [...] hay un ser humano [...] cosa que antes no veía. Uniformados sí, pero como todos, con sus deseos de superación y sus problemas [...] como somos todos los seres humanos (J, comunicación personal, 19 de enero de 2018).

El trato hacia el personal civil, por parte de los militares, es muy cordial y respetuoso, dejando claro una relación de iguales que buscan mayor profundidad en temas de seguridad y defensa que ofrece la maestría; sin embargo, el trato entre los mismos militares (remarcado por los tres entrevistados) está mediado por el rango, el tiempo de servicio y el conocimiento en un área de estudio específico. “Ellos se tratan de una manera diferente, digamos más tosco, con órdenes” resalta E (E, comunicación personal, 13 de enero 2018). Sumado a esto la relación cívico-militares se restringen en algunos casos, pues los militares tienen cursos

separados donde manejan información sensible sobre el conflicto armado y operaciones realizadas o a realizar donde el acceso civil es prohibido, incluso para los instructores civiles como J: En clase nunca tratamos esos temas (referente a temas sensibles como paramilitares, guerrilla) [...] yo soy un civil sobre el cual no se libera mucha información [...] pese a que estoy trabajando con ellos, desde el punto de vista académico, esos temas no han salido a la luz. Son muy prudentes en sus temas (J, comunicación personal, 19 de enero de 2018).

En cuanto al desarrollo mismo del conflicto los tres estudiantes afirman que el papel de las FF.MM es de destacar pues a simple vista son civiles como ellos, pero la instrucción, la mística y la doctrina que poseen en su profesión los lleva a combatir con las armas, alejarse de sus familias, vivir en condiciones hostiles, estar dispuestos a dar su vida o tomar una vida ajena por el cumplimiento de su deber. A lo que S y E aseguran respectivamente: Yo creo que las fuerzas militares, de policía, yo que ahora trabajo con la policía, son instituciones en extremo complejas es de las instituciones más complejas que tú puedas encontrar porque son lugares de mística, son lugares de verticalidad, son lugares de... donde hay unas relaciones que uno no se encuentra en ningún otro lado, y la persona que por lo general entra a hacer una carrera militar cual fuera su rol de soldado, suboficial u oficial, es gente que no tiene cabeza para nada más, realmente se vuelve su vida, o sea su vida es ser soldado porque no les da para más (S, comunicación personal, 8 diciembre 2017).

Como colombiana admiración por las FF.MM siento que son los que se encargan de la seguridad y defensa de país, tienen una gran responsabilidad con los ciudadanos [...] uno ve más de cerca las cosas en el aspecto militar, lo que pasa, cómo operan los militares, cómo trabajan [...] mi sentido de admiración siguió siendo el mismo porque [...] conocí el recorrido que tiene que hacer quienes son generales o coroneles hoy en día, pues tuvieron un recorrido en su vida militar bastante difícil (E, comunicación personal, 13 de enero 2018).

Sobre los otros actores se menciona de forma explícita e implícita que son el resultado de una realidad social que perdura en el tiempo (desigualdad) y a la suma de un Estado incapaz de llegar al grueso de las regiones presentes en su territorio. Así pues esto favorece la construcción de grupos ilegales que se oponen al gobierno de turno, obligando al Estado representado en sus FF.MM a tomar acciones y llegar a todos los extremos del país. Como muestra S en dos momentos de la entrevista que se complementan: Es la manifestación de unas necesidades sociales insatisfechas, de un país supremamente centralizado [...] hay unos momentos en los que solamente la fuerza pública es el único sostén del Estado y la única manifestación real de una institucionalidad porque más allá del Congreso, más allá del presidente, más allá de unas instituciones de nuevo centralizadas incluso no solo en Bogotá, centralizadas en Bogotá y Medellín, Cali y Barranquilla. Son demasiado pequeñas, entonces, la real expresión del Estado viene siendo por medio de la fuerza pública, o sea, la relación directa del Estado (S, comunicación personal, 8 diciembre 2017).

Finalmente en lo que respecta al contenido mismo de concepto de guerra se remarca cómo una actividad humana mediada por la política y quienes la ejecutan son profesionales en armas con la capacidad de tomar vidas, sacrificar la propia, buscar la paz y representan al Estado. Aspecto que resume E, al decir que: “la guerra son los medios y fines para alcanzar algún tipo de objetivo, de poder” (E, comunicación personal, 13 de enero 2018), complementado con la afirmación de S “hay que entender que el criterio principal es que hay unas fuerzas legítimas estatales que están repeliendo a grupos de naturaleza ilegal, ilegítimos, ilegítimos e ilegales, entonces se puede entender que hay un problema entre un estamento legal y un estamento ilegal” (S, comunicación personal, diciembre 2017). Es como explica Kaldor con el surgimiento de las nuevas guerras, pues este se debe al contexto de la erosión de la autonomía del Estado, la erosión del monopolio de la violencia legítima (Kaldor, 2001).

Conclusiones

Tras el recorrido dado en este capítulo se pueden reafirmar varios puntos tratados a lo largo de este escrito y estos son el aporte y conclusiones que arroja la presente investigación. El primero se refiere a la posibilidad de engrosar el campo investigativo del devenir del conflicto armado en Colombia y sus distintos actores. Para efectos del presente texto el énfasis se centró en el papel que ha tenido las FF.MM, inicialmente fueron partidarias del gobierno de turno y el brazo armado para imponerse sobre la ideología contraria a la promulgada por el Estado. Al mismo tiempo, es posible observar que las Fuerzas Militares, tras un desgastado periodo de violencia, previo al Frente Nacional, se hacen con el poder, por medio de un golpe de estado, e instauran la alternancia de la tenencia del poder por las principales corrientes políticas. Más adelante en el tiempo, toman distancia de la política y su participación directa como estrategia para conservar su autonomía y evitar más derramamiento de sangre.

Las FF.AA fueron las encargadas de enfrentar la beligerancia como la fórmula para solucionar, por parte del Gobierno, todo tipo de situaciones que alteraran el orden público (incluyendo desde protestas urbanas hasta acciones guerrilleras). La acción militar hacía parte de una intervención integral, como extensión y representación del Estado bajo un constante ir y venir entre autonomía y supeditación al Estado. Respecto a las relaciones cívico-militares, al compartir un interés en común (evitar la proliferación de las guerrillas y, de ser posible, erradicarlas del territorio por cualquier medio posible) generaron reciprocidades y comprometieron la autonomía alcanzada por las Fuerzas Militares como representantes del Estado en periodos anteriores, ya que se vieron involucrados en la preparación y/o patrocinio de grupos de autodefensas en las regiones y territorios locales.

Esto conllevó la definición de un enemigo interno (las guerrillas y el narcotráfico) que debía ser combatido desde las posibilidades de las Fuerzas Militares para obtener la paz,

la soberanía del Estado y la recuperación del territorio. Es por ello que se llevaron a cabo ajustes en las causas a combatir de dichos grupos, que se ajustaron según al planteamiento internacional (principalmente Estados Unidos), para combatirlos y contar con el apoyo financiero y táctico extranjero. Al mismo tiempo se modernizaron las Fuerzas Militares (tecnológicamente, tácticamente y mejor preparación del personal) con el fin de enfrentar, mitigar, reducir y superar al enemigo interno, cualquiera que fuera) para obtener la paz por cualquier medio necesario, en este caso fue la guerra.

Es decir que el Estado mismo es el encargado de legitimar el actuar de las Fuerzas Militares que se encuentran bajo su mando. El poder militar está supeditado al poder civil o como se sostenía en el primer capítulo de este texto: es el Estado quien posee la potestad de hacer y desarrollar la guerra entendida, desde la apuesta teórica de Clausewitz, como una actividad social que incluye la movilización y organización de individuos, que regula ciertos tipos de relaciones sociales y posee su lógica particular, enfocada como un acto político para que prevalezca una forma de proceder (ideología) sobre otra (Roxborough, 1994).

Todo el proceso histórico que ha atravesado el conflicto en Colombia permite ver como las Fuerzas Militares han cambiado su acción debido a la cercana relación con la política del Estado. Esto no es fortuito, en tanto que el Estado es el encargado del monopolio de la fuerza y de la posibilidad de la coacción, que posee entidades como la Policía y/o el Ejército para controlar y ejercer dicho monopolio (Weber, 1964).

El segundo aspecto encontrado es la postura de gobierno que dictamina el desarrollo y accionar de las Fuerzas Militares. Durante el gobierno de Pastrana las FF.MM se enmarcan en la disposición a la negociación con grupos al margen de la ley, mientras se combate a dichos grupos simultáneamente. Para el gobierno de Uribe, se sostiene que la guerrilla no tiene fines políticos y son narcoterroristas, por tanto hay que obtener una victoria militar y no una negociada. El gobierno Santos, por su parte, propone una pacificación del territorio

nacional o lo que es la búsqueda de la paz negociada desde una posición de ventaja militar sobre los grupos generadores de violencia. Esto es la muestra, apoyado en la pequeña revisión histórica, el recorrido por las editoriales y las entrevistas, de la estrecha relación que existe y es persistente entre el planteamiento de gobierno y el discurso militar sobre el desarrollo de la guerra.

Un tercer aspecto es el postulado de asumir la guerra como un hecho social, o que no permite considerarla aislada del terreno de la política y el gobierno, pues es aquí donde se avala o no la participación en dicho hecho social. Asimismo, se afirma que la política interna del Estado tiene gran importancia para explicar una postura material de la guerra y su desarrollo. Por ejemplo el proceso de gobernanza (cómo se tratan los asuntos humanos) y la legitimidad del Estado en este caso, se aprecia una postura que aboga por recuperar el territorio. Es decir, que uno de los propósitos de la guerra es el control territorial y posterior ejercicio de soberanía en el lugar recuperado, la llegada de la institucionalidad del Estado representado en un primer momento con las FF.MM y después con la llegada de servicios estatales (seguridad, salud, educación, orden judicial). Como lo afirma Kaldor, el monopolio de la violencia legítima se ha roto y lo fundamental no es la privatización de la violencia sino la crisis de legitimidad (2001), lo que permite asumir que la postura del gobierno al enfrentar a grupos militares ilegales (pérdida del monopolio de la violencia) es la retoma territorial y asegurar la llegada del Estado al grueso de la población o una crisis de legitimidad en tanto el Estado es ineficiente en acobijar a toda la población en el territorio en el que es soberano.

Con esta preocupación por la pérdida territorial y de legitimidad, el gobierno insta a las Fuerzas Militares a ser su grupo de avanzada en la recuperación de ambos aspectos, siendo una preocupación central en todos los periodos presidenciales entre 1998 al 2014. Se inicia un ejercicio de modernización y profesionalización de las FF.MM para hacer la guerra y garantizar su superioridad respecto a su adversario. De igual manera a nivel táctico y

estratégico de las FF.MM, se da la capacitación en parámetros para hacer la guerra según sea el contexto (territorial, social y político) en el cual tenga lugar la confrontación por la supremacía militar o, como afirma Janowitz, el adoctrinamiento es diseñado para desarrollar capacidades críticas y una orientación crítica (Janowitz, 1960; pág 13). Sin embargo, el punto más destacado y reiterativo se refiere a la profesionalización de las FF.MM, siendo este el resultado del entrenamiento prolongado, la adquisición de habilidades especiales que le permite al personal militar brindar un servicio especializado (Janowitz; 1960). Es decir que las Fuerzas Armadas estén en la capacidad experta de hacer la guerra y administrar la violencia bajo el halo de legitimidad que les brinda el gobierno.

Con lo visto a lo largo de la investigación, se puede contrastar la visión inicial con la que se partió a la hora de entender la guerra y la noción que se ha apreciado de la misma hasta este punto. Inicialmente, se entiende la guerra como un fenómeno social, con diversas dimensiones (significado, motivaciones, ejecución, táctica, entre otras), siendo una actividad social y política, para imponerse sobre un determinado Estado o ideología (Scott, 2001). Sin embargo, el devenir histórico del país le ha dado una singularidad a la concepción misma de la guerra gracias a tres puntos notorios. Primero, se destaca que el carácter del conflicto está dado por un proceso histórico que define y redefine a sus participantes constantemente; segundo, estos participantes, en su mayoría, son víctimas que, tiempo después, pueden convertirse en victimarios; finalmente, está el cambio en la doctrina militar para adaptarla a la realidad del conflicto armado, siendo el cambio más significativo el paso de una guerrilla insurgente a un grupo de terroristas, a los cuales hay que vencer militarmente.

Hasta este punto se puede dar una concepción de la guerra centrada en el enfrentamiento entre bandos (dos o más), que forma parte del oficio del militar. Esta está mediada por las pretensiones del Estado e involucra la constante lucha por el control del territorio, la legitimidad del gobierno y las acciones realizadas por las Fuerzas Militares para

hacerse con dicho territorio. Es decir que lo central en la guerra interna de Colombia o lo que es la clave de la violencia es la reconstrucción de la legitimidad (Kaldor, 2001; pág 147), independientemente de las variaciones ilustradas en el capítulo anterior y el presente. Como resultado se aprecia una construcción de la noción de guerra que permea en el imaginario de quiénes son el personal militar, del hacer la guerra y como se refleja un concepto aplicado en la realidad. Así pues, se observa que la corriente de adoctrinamiento Estado-Fuerzas Militares-ESDEGUE-alumnos tiene repercusiones de modo tal que permite a esos alumnos ser el inicio y final mismo de la corriente, debido a que son estos últimos quienes, por medio del conocimiento transmitido y aprendido y los imaginarios que poseen, dan contenido a la noción de guerra, el desarrollo de la misma, a los actores involucrados (con especial énfasis en el Ejército y el personal militar) y a la profesión militar.

Por último cabe resaltar que la presente investigación, en medio de sus limitaciones, abre nuevas aristas para futuras indagaciones. Si bien se encontraron salvedades como falta de acceso en las cátedras dadas a los estudiantes de la ESDEGUE, un mayor número de entrevistas o contar con testimonios de personal directivo de la institución este trabajo es solo la punta del iceberg, pues se pueden explorar campos como el desarrollo pedagógico de la ESDEGUE, en contexto de un postconflicto cómo prepararse para guerra, profundizar en la semántica empleada en las editoriales, contrastar los imaginarios de sí mismos como oficiales superiores y su construcción respecto a los suboficiales, entre otras tantas que puedan a futuros investigadores interesar. Lo más importante es continuar indagando en el papel que ha jugado el Ejército, como representante del Estado, dentro del conflicto armado y las lógicas, imaginarios, conceptos y todo aquello que sucede dentro de esta institución.

Bibliografía

- Bell, Gustavo (2002). El papel de las Fuerzas Militares y el futuro de la paz en Colombia En *Revista Fuerzas Armadas*. Publicación especializada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia-vol LVII-edición 182. Pp 6-10.
- Bonavena, Pablo & Nievas, Flabián (2006). Las nuevas formas de la guerra, sus doctrinas y su impacto sobre los derechos humanos En *Fermentum año 16, núm 46*. Venezuela. Pp 355-371.
- Bonnett, Manuel J. (1998). Notas de presentación de la estrategia general de las Fuerzas Militares de Colombia En *Revista Fuerzas Armadas*. Publicación especializada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia-vol LIII-edición 166. Pp 6-10.
- Clausewitz, Karl Von (1999) [1832] *De la Guerra*, Ediciones del Ministerio de Defensa de España.
- Cely, Édgar A. (2010). Fuerzas Militares: hacia la prosperidad democrática En *Revista Fuerzas Armadas*. Publicación especializada de la Escuela Superior de Guerra de Colombia-vol LXXXIII-edición 215. Pp 4-5.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado en *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Pp: 111-194.
- Colombia (1997). Constitución Política. Editorial: Legis, Bogotá.
- Cubides, Fernando (2004). *Narcotráfico y Guerra en Colombia: Los paramilitares* En Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Editorial: Norma.
- Cubides, Fernando (2008). Colombia: las lógicas de la guerra irregular y la resistencia civil En *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, núm. 19*. Editorial Universidad Bolivariana, Chile. Pp 1-14.

- Cuéllar, Sebastián (2009). La Sociología piensa la guerra: algunas consideraciones en torno a la Sociología de la Guerra En *Entre la hacienda y la sociedad civil: lógicas culturales de la guerra en Colombia*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Pp 13-35.
- Damint, Ruth (2007). La Educación Democrática para la Defensa. Documento de Análisis de RESDAL, Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina. Buenos Aires.
- Denzin, Norman K. (1990). Triangulation En: Keeves, John P. *Educational Research, Methodology, and Measurement*. An International Handbook, Pergamon Press.
- Escuela Superior de Guerra (2014). Historia de la Escuela de Guerra en *Escuela Superior de Guerra*. Colombia. Recuperado de <http://www.esdegue.mil.co/node/116>.
- Escuela Superior de Guerra (2014). Estructura orgánica en *Escuela Superior de Guerra*. Colombia. Recuperado de <http://www.esdegue.mil.co/node/14>.
- Estrada, Fernando (2000). Lenguajes de la guerra y la política en Colombia En *Reflexión política, vol 2, núm 4*. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pp 1-8.
- Ferro, Juan G. & Uribe, Graciela (2002). El orden de la guerra: las FARC-EP, entre la organización y la política. Editorial: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
- Foucault, Michel (1998) [1976]. Historia de la sexualidad. Siglo XXI Editores. Madrid. Capítulo I Nosotros, los victorianos; Capítulo II La hipótesis.
- Foucault, Michel (1967) [1964] *Historia de la locura en la época clásica*. Mexico D.F. Ed: Fondo de Cultura Económica
- Fundación seguridad y democracia (director Alfredo Rangel), (2003) Avanzando hacia el cambio: 1998-2003 En *Fuerzas Militares Para la Guerra, la agenda pendiente de la reforma militar*. Editorial Fundación seguridad y democracia. Colombia. Pp. 41-70.

- Gantiva, Diego A. (2009). La educación militar como factor estratégico En *La educación militar como un factor estratégico en una democracia en conflicto*. (Tesis de maestría). Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Pp 7-32.
- Giddens, Anthony. (2007). Estados nacionales y violencia. *The Nation-State and Violence. Relaciones Internacionales*, 0(5). Recuperado de http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/index.php?journal=Relaciones_Internacionales&page=article&op=view&path%5B%5D=47&path%5B%5D=41
- Grajales, J. F., & Rodriguez, A. I. (2011). Evolución de las estrategias de guerra en Colombia: ¿Cómo han evolucionado las estrategias de guerra utilizadas por el ejército colombiano en la historia de Colombia, desde 1930 hasta 2006? *El Ágora USB*, 67-88.
- Janowitz, Morris (1971). Professionals in violence en *The professional soldier: A Social and Political Portrait* Ed:Free Press Pp: 3-19
- Janowitz, Morris (1971). The logic of war en *The professional soldier: A Social and Political Portrait* Ed:Free Press Pp: 257-282
- Kaldor, Mary (2001). Las nuevas guerras: la violencia organizada en le era global Ed: Tusquets Editores.
- León, Adolfo (2005). El servicio militar como vivencia: ¿qué tanto transforma al individuo? En *Militares otra visión, otros estudios*. Editorial Nomos. Pp 95-121.
- León, Adolfo y Manrique, Andrea (2005).¿Cómo perciben los niños y niñas, hijos e hijas de militares, la guerra, la violencia y la paz? En *Militares otra visión, otros estudios*. Editorial Nomos. Pp 126-178.
- Ley N° 508. *Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002*. Diario Oficial No. 43.651 del viernes 30 de julio de 1999.

- Ley N° 812. *Plan Nacional de Desarrollo, hacia un Estado comunitario*. Diario Oficial No. 45.231 de junio 27 de 2003
- Ley N° 1151. *Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010*. Diario Oficial No. 46.700 de julio 25 de 2007
- Ley N° 1450. *Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014*. Diario Oficial No. 48.102 de junio 16 de 2011.
- Llano Ángel, Hernando (2009). Las víctimas invisibles y el conflicto en Colombia En *Victimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia*. Ed Huygens, España Pp. 17-35.
- López, Clara (2010). Y refundaron la patria. *De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, Congreso Visible, Dejusticia, Grupo Método, MOE.
- Mejía, Jairo E. (2008). Arquetipos y paradigmas históricos en los militares colombianos, exploración desde la conquista al siglo XXI En *De milicias reales a militares contrainsurgentes*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Editores Cesar Torres & Saúl Rodríguez. Pp 93-116.
- Naranjo Giraldo, Gloria (2001). El desplazamiento forzado en Colombia. Reinención de la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacionales En *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona N° 94 (1). Pp 1-27.
- Nievas, Flabian. (2009). Sociología de la Guerra. *Redes. com: revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación*, (5), 25-48.
- Ortiz, Orlando (2009). Militarismo: discurso y verdad En *Militarismo: discurso y verdad. La política de Seguridad Democrática*. (Tesis de maestría). Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Pp 15-34.

- Oslender, Ulrich (2006). Des-territorialización y desplazamiento forzado en el pacífico Colombiano: la construcción de geografías de terror”. En Herrera Gómez Diego y Piazzini Carlos Emilio (Editores) (Des) territorialidades y (no) lugares. Procesos de configuración y transformación social del espacio. Editorial La Carreta, Medellín. Pp 155 – 172.
- Pizarro, Eduardo (2012). *Las Farc (1949-2011): de guerrilla campesina a máquina de guerra*. Editorial: Norma, Bogotá.
- Romero, Mauricio (2003). *Paramilitares y autodefensas: 1982-2003*. Editorial: Planeta, Bogotá.
- Roxborough, Ian (1994). Clausewitz and the Sociology of War In *The British Journal of Sociology*, Vol. 45, No. 4. Published by The London School of Economics and Political Science. Pp 619-636.
- Ruiz, Jorge (2009). Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas en Forum: qualitative social research. Volumen 10, No. 2, Art. 26 – Mayo 2009. Published by Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. Berlín.
- Sanchez, Gonzalo (2008). Guerra y política en la sociedad colombiana en *Guerra y política en la sociedad colombiana*. Editorial Nomos, Colombia. Pp 11-65.
- Scott, Alan (2001). The Political Sociology of War In *The Blackwell Companion to Political Sociology*. Ed: Blackwell. Pp 183-194.
- Scruton, Roger (1987). Notes on the sociology of war In *The British Journal of Sociology*, Vol. 38, No. 3. Published by The London School of Economics and Political Science. Pp 295-309.
- Tilly, Charles (1985). *War Making and State Making as Organized Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Uribe, María T. y López, Liliana. (2006). *Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia*. Medellín: La Carreta Histórica.
- Van Dijk, Teun (1990). La noticia como discurso. *Comprensión, estructura y producción de la información*.
- Velásquez, Eduardo J. (2007). Historia de los paramilitares en Colombia En *Historia (Sao Paulo)*, vol 26, núm 1. Universidad de Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho São Paulo, Brasil. Pp 134-153.
- Weber, Max. (2014) [1964]. *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva* (Vol. 2051). Fondo de cultura económica.

Anexos

Los anexos de la presente investigación se encuentran en el siguiente link, ordenados en una carpeta general y subcarpetas específicas según el título de los anexos mencionados en el índice: <https://drive.google.com/open?id=1c5a-6bYy5XQmeXtPmDokzaIOTu2GKpgs>